ISSN: 2216-1244

Pacífico

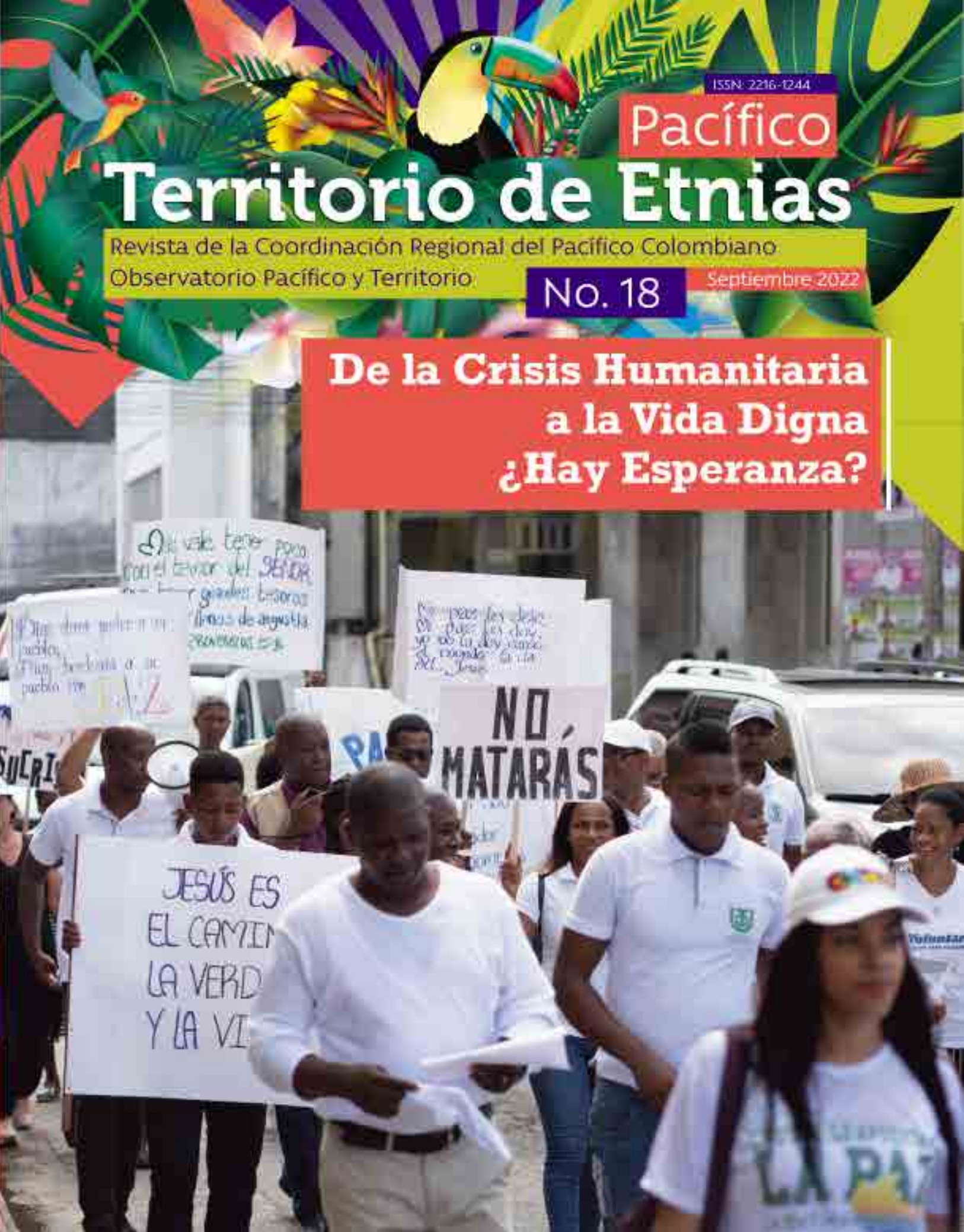
Territorio de Etnias

Revista de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
Observatorio Pacífico y Territorio

No. 18

Septiembre 2022

De la Crisis Humanitaria a la Vida Digna ¿Hay Esperanza?



La Coordinación Regional del Pacífico (CRPC) es una red de organizaciones étnico-territoriales que, en alianza con las jurisdicciones eclesiásticas y organizaciones no gubernamentales de la región, trabaja en la defensa y protección de las comunidades y sus territorios haciendo seguimiento a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Facebook: @coordinacionpacifico
Twitter: @CRPacifico
www.coordinaciondelpacifico.org

Comité editorial
Equipo Operativo CRPC

Equipo Operativo CRPC
Pbro. Jesús Albeiro Parra Solís - Coordinador general
Leidy Aguirre Paz – Asistente administrativa y contable
Caren Adriana Castro – Asesora
Nubia Ximena Salamanca Rozo – Cooperante local AGIAMONDO
Diego Candelo Meza – Cooperante local AGIAMONDO
Eric Bejarano – Cooperante internacional AGIAMONDO
Matts Olsson - Cooperante internacional AGIAMONDO
Danna Aguilar – Asistente de Investigación
David Ramírez - Comunicador
Diego Pérez Guzmán – Asesor

Foto portada y contraportada
Matts Olsson – Cooperante internacional AGIAMONDO

Diseño, diagramación e impresión
Editorial Nuevo Milenio, Medellín, 2022

Colaboradores en este número
Equipo Operativo CRPC;
Magaly Portocarrero Obregón, Comunicadora comunitaria RedPESCA;
Yesid Idrobo, Periodista e integrante de la RedPESCA;
Andreas Hetzer, Red de Comunicación Étnico-Popular de la Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali;
Jesús Alfonso Flórez López, Asesor Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico- CIVP;
Dr. Jaime H. Díaz A., director Corporación PODION;
Elizabeth Arango, Coordinadora oficina prensa y comunicaciones Alcaldía El Charco- Nariño

Fotografías
Matts Olsson – Cooperante internacional AGIAMONDO;
Magaly Portocarrero Obregón, Comunicadora comunitaria RedPesca;
Andreas Hetzer, Red de Comunicación Étnico-Popular de la Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali.
Santiago Ramírez Martínez, Fotoperiodista.
Carolina Meza, Realizadora audiovisual Encuentro de Oralidad del Pacífico Sur.
Diego Candelo Meza, Cooperante local AGIAMONDO

Apoyo
MISEREOR
IHR HILFSWERK

Isla de los Rojas, Atrato/ Foto: Matts Olsson

¡UN SALUDO desde Territorio de Etnias

Por: Pbro. Jesús Albeiro Parra Solís, Coordinador general

Ficha fotografía

Nuevamente llegamos a ustedes desde "Territorio de Etnias", con un saludo cargado de aires de cambio, esperanzas y expectativas con la entrada, por primera vez, de un Presidente de la República de izquierda y una Vicepresidenta afrodescendiente; el primer año de gobierno va a hacer crucial y decisivo, no solo para el Presidente Petro y su bancada en el Congreso, sino también para las comunidades de los territorios y regiones que le apostaron al **"CAMBIO"**, porque si en ese primer año el gobierno no logra tramitar en el Senado y este aprobar las grandes reformas que se necesitan para que de verdad se hagan las transformaciones que Colombia y sus regiones requieren, lo que vamos a tener son viejas frustraciones, esperando a que todo continúe igual o peor que antes, acabándole la luna de miel al gobierno y a su bancada con un pueblo que creyó en el **"CAMBIO"**, como dice el dicho, quiera Dios que así sea, como lo prometido y esperado, para bien del pueblo colombiano.

Para 'Territorio de Etnias' y sus comunidades serán muy importantes las Reformas: la Tributaria, la Agraria, a la Salud, a la Educación, a la Fuerza Pública, entre otras; pero no menos importante, **por no decir que la más importante**, es la decisión de retomar **el camino de la Paz, la construcción de una Paz total y plena,** que pasa por retomar la Implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc de una manera coordinada, articulada e integral; por reiniciar los diálogos de Paz con el ELN y por un proceso de acogida o sometimiento a la Justicia de los otros grupos armados; mientras todo esto se vaya dando hay que dar otros pasos como un "Cese al Fuego Humanitario Multilateral"; retomar las iniciativas de Acuerdos Humanitarios o de los Pactos de Convivencia, procesos que vienen caminando en varias regiones de Colombia, como se evidenció en la pasada Cumbre Humanitaria Nacional realizada el 27 de julio en Bogotá, donde se abogó por todo lo anterior y se habló de diálogos regionales, diálogos sociales, llegando a la conclusión de que la Paz total, plena, estable, duradera y la gravísima crisis humanitaria no se gestionará, sino se hace desde los territorios, con los territorios y para los territorios.

'Territorio de Etnias' ha sido testigo, en la región del Pacífico y Sur Occidente durante los 4 años del gobierno del Presidente Duque, de la profundización de la guerra, del conflicto armado, de la agudización de la crisis humanitaria, la cual se traduce en las siguientes afectaciones: desplazamientos masivos e individuales, confinamientos de comunidades enteras, reclutamiento de niños y niñas, territorios minados, asesinatos, señalamientos y estigmatización de lideres/as comunitarios/as y firmantes del acuerdo de paz; también ha sido testigo de las afectaciones ambientales al territorio, por los cultivos de uso ilícito y toda la espiral del narcotráfico, la deforestación y la minería; todo lo anterior con la permisividad de un gobierno y de un Estado indolente, con la convivencia de un sector de la Fuerza Pública, el flagelo de la corrupción de los gobiernos y funcionarios a escala municipal, departamental y nacional, todo se vale en la región del pacífico colombiano con tal de vulnerar los derechos de las comunidades y de hacer caso omiso a las denuncias y clamores de las organizaciones étnico territoriales y de la iglesia en la región, junto a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de organismos de la Comunidad Internacional; quienes constantemente emiten pronunciamientos, comunicados, elaboran informes de seguimiento, realizan misiones humanitarias en los territorios y hacen presencia continua, permanente, con el propósito común de continuar impulsando y demostrando que si es posible el **"Pacto por la Vida y por la Paz"**, en la región del Pacifico y Sur Occidente colombiano.

'Territorio de Etnias' ha sido testigo de las iniciativas de paz que vienen construyendo e implementado las comunidades en medio de la guerra y de la crisis humanitaria; es testigo de las iniciativas de acuerdos humanitarios en el Chocó, de la Juntanza interétnica y cultural de Buenaventura, de los pactos de convivencia y diálogos sociales en el Cauca y como no mencionar la mesa humanitaria de Nariño y los ejercicios de paz urbana en Cali. También acompañamos a la Coordinación Regional del Pacífico en el proceso del Comité de Impulso para sacar adelante la Coordinadora Humanitaria Nacional, con el propósito de construir una Agenda Humanitaria Nacional, que fue presentada, como ya dijimos, en la Cumbre Humanitaria Nacional el 27 de julio, con la presencia de delegados/as de 15 regiones de Colombia, el gobierno que acaba de llegar, la Comunidad y Cooperación Internacional; todo con el fin, de aportarle desde las regiones a una **Paz Total**, estable y duradera.

DESEAMOS QUE LE VAYA BIEN AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO Y DE FRANCIA MÁRQUEZ, PORQUE SI LES VA BIEN, LE VA BIEN AL PUEBLO COLOMBIANO.

CONTENIDO

Editorial
Por: Eric Bejarano
Cooperante Internacional AGIAMONDO
8

Balance de la Crisis Humanitaria en la región pacífico durante el gobierno de Iván Duque
Por: Diego Pérez Guzmán, asesor CRPC
10

Mimetismo comunitario de actores armados "anónimos" en el pacífico
Por: Nubia Ximena Salamanca Rozo, Cooperante local AGIAMONDO- CRP
14

Sentencia de tutela 009/22 ¿una luz de esperanza para los asentamientos indígenas urbanos en Quibdó?
Por: Matts Olsson, Cooperante Internacional AGIAMONDO
19

¿Hay perspectiva de futuro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Chocó? Suicidio en comunidades indígenas
Por: Nubia Ximena Salamanca Rozo, Cooperante local de investigación AGIAMONDO- CRPC
24

¿Existen oportunidades para las presentes y futuras generaciones en la costa pacífica chocoana?
Por: Nubia Salamanca Rozo, Cooperante local AGIAMONDO y Eric Bejarano, Cooperante Internacional AGIAMONDO
30

Salsa y sangre: Juventud afro y violencia urbana en Cali
Por: Red de Comunicación Étnico-Popular de la Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali
36

Confinamiento en el Cauca durante la crisis humanitaria
Por: David Ramírez, Comunicador CRPC
24

Las mujeres afros e indígena de la costa pacífica caucana resisten en los territorios ante la crisis humanitaria que viven en estos territorios
Por: Magaly Portocarrero Obregón, Comunicadora comunitaria RedPesca.
46

530 años después indígenas Awá siguen sobreviviendo al exterminio
Por: Yesid Idrobo, Periodista e integrante de la RedPesca
50

Planes de desarrollo con enfoque interétnico para el cuidado de la vida y la Paz territorial en el Pacífico nariñense
Por: Diego Candelo Meza, Cooperante local AGIAMONDO y Elizabeth Arango, Coordinadora oficina prensa y comunicaciones Alcaldía El Charco- Nariño
52

Responsabilidad del Gobierno de Iván Duque frente a la Crisis Humanitaria en la región del Pacífico Colombiano
Por: Diego Pérez Guzmán, asesor CRPC
57

Primero la Vida
Por: Jesús Alfonso Flórez López, Asesor Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico- CIVP
62

Más que una deuda, es una obligación
Por: Dr. Jaime H. Díaz A., director Corporación PODION
65

Foto: Matts Olsson

EDITORIAL

Por:
Eric Bejarano
Cooperante Internacional AGIAMONDO

"Me siento orgulloso", con esta frase se inició; hace ya cuatro años, un período presidencial que para la dicha de las mayorías por fin termina. Habría que preguntarle a la persona que lanzó esa frase, si ese "orgullo" hoy en día tiene algún sentido o validez. Más aún cuando ese sentir de sobrevaloración, de exceso de autoestima y tono de superioridad, no se ve reflejado en algunas mínimas consideraciones alrededor de acciones reales y logros concretos que permitan establecer o determinar; después de cuatro años de gobierno, algún mérito para poder hablar de un orgullo propio, habría que cuestionar dónde está el país de los grandes unicornios que prometió, porque sin ninguna duda, Colombia aún necesita mucho trabajo para lograr ser un país de grandes unicornios.

Lo que sí es meritorio con M mayúscula y con suficientes creces, es el país que se deja y que se prometió hace cuatro años atrás, haciendo más viva y fehaciente otra de sus máximas; "esa Colombia con P mayúscula que necesitamos"; con p de pobreza, de pauperización ampliada, con p de Profanación a los sitios sagrados de las comunidades y sus territorios, con p de Plagio y Pillaje continuado, con p de Putrefacción y corrupción Política, con p de Paz Prohibida, con p de Persecución de líderes y lideresas, con p de Paramilitarismo Potenciado y con p de Pandillas criminales. Quizá sea necesario y muy oportuno seguir citándolo en este momento que termina su ciclo, donde las mayorías; utilizando sus mismas frases le dicen: ¡Si señor! "... se le acabó la guachafita", "así lo vi, así lo conocí y así NO lo quer í"

Esta nueva edición de la revista Pacífico Territorio de Étnias es la voz, el reflejo, balance y acumulado de una crisis humanitaria que se ha venido acrecentando en los últimos cuatro años, es la voz del duro trasegar que han tenido las comunidades para poder sobrevivir, este nuevo número de la revista es un llamado a la crítica y al cuestionamiento; con más que suficientes argumentos, a un gobierno verdaderamente incapaz que no logró sus metas y que en lo absoluto no se puede sentir orgulloso por el quehacer de su mandato. Así es, se le acabo el tiempo y no cumplió, no logró tejer y construir las alianzas con las mayorías para desarrollar compromisos amplios y sólidos, no logró ser fiel a los términos y principios de la Paz, y mucho menos ser fiel a su estricto mandato y amplio cumplimiento. La promesa de "Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad" se quedó; lamentablemente, en una promesa más que acompaña; entre otras muchas, la promesa del país de los grandes unicornios.

Este nuevo acumulado de Pacífico Territorio de Étnias es también un llamado; a modo de pregunta, sobre los retos y las dificultades con las que se inicia un nuevo ciclo, es un llamamiento desde los territorios a la responsabilidad que tendrá el nuevo gobierno de cómo ejercer su mandato, siguiendo el clamor y las necesidades de transformación y mejoras; que aducen las mayorías, en el ámbito social, económico, político y ambiental, y además teniendo en cuenta; siempre como principio fundamental, que primero es la Vida.

Novita, Río Tamaná, Chocó / Foto: Santiago Ramírez Martínez

Desde la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano y toda su convergencia de organizaciones étnico territoriales, jurisdicciones eclesiásticas, entidades académicas y otras organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de esta red, este número de Territorio de Étnias se concentra en una mirada en retrospectiva de lo que ha sido y continua siendo, el difícil camino de la crisis humanitaria a la vida digna y cuestionarse hoy en día y en perspectiva a futuro ¿renace la esperanza?. Esta edición reitera el llamado inminente, definitivo y responsable desde los territorios y para los territorios, a contribuir en una dinámica como escenarios participativos y hacedores de su propio presente y futuro. De las misma manera es un llamado a la participación activa; de toda la sociedad, como actores políticos, garantes y veedores, para que las promesas y las metas de este nuevo ciclo de gobierno se cumplan y se vean reflejadas en la apuesta y la materialización de todos los componentes merecedores; que por tantos años han sido excluidos, para la obtención de la Paz Total.

Balance de la Crisis Humanitaria en la región pacífico durante el gobierno de Iván Duque

Fotografía: Matts Olsson

Por: Diego Pérez Guzmán, asesor CRPC

En síntesis, la crisis humanitaria sigue siendo la consecuencia de la ausencia de la paz territorial, así como de un modelo de desarrollo sustentable y acorde con las características del territorio y las necesidades reales de sus pobladores étnicos.

Si bien es cierto que las comunidades de la región del Pacífico y suroccidente colombiano están viviendo una aguda crisis humanitaria y violencias, como consecuencia de la reconfiguración del conflicto armado, dicha crisis humanitaria no debe interpretarse (ni atenderse) sin analizar la estrecha relación entre las deficiencias en la implementación del Acuerdo de Paz (y en lo que compete a los pueblos del Pacífico: el Capítulo Étnico) con el desarrollo territorial/regional.

En síntesis, la crisis humanitaria sigue siendo la consecuencia de la ausencia de la paz territorial, así como de un modelo de desarrollo sustentable y acorde con las características del territorio y las necesidades reales de sus pobladores étnicos. Por ello, la CRPC trabaja con el enfoque que la acción humanitaria debe ser integral y ofrecer soluciones duraderas, lo cual significa que no puede reducirse al asistencialismo humanitario y solo tratamiento de emergencias.

La actual crisis humanitaria en la región obedece a los grandes vacíos en la implementación del acuerdo de paz, a la ausencia de políticas o medidas eficaces de protección a los líderes y lideresas sociales y étnicos y, a la presencia del Estado a través de una nueva institucionalidad en los territorios. Estos vacíos permitieron la reconfiguración de los actores armados y el recrudecimiento de la violencia expresados en desplazamientos, confinamientos de comunidades, asesinatos, reclutamiento, entre otros hechos victimizantes.

Los informes de las misiones humanitarias realizadas en el segundo semestre del año pasado y lo corrido de este 2022, así como los informes de las agencias humanitarias del Sistema de la ONU (OCHA), permiten señalar que existen incalculables necesidades de alimentación, albergues, dotaciones, implementos de salud y medicinas, etc., pero también, de un trabajo fuerte de incidencia y exigibilidad a los actores armados y al Estado, para el respeto a la población civil y las garantías de los derechos colectivos y territoriales. En esta dirección la iniciativa de *Agenda Humanitaria Nacional*, impulsada por la CRPC, el CONPA, FISCH y Vivamos Humanos jugará un importante papel.

La crisis humanitaria en cifras

De acuerdo con el informe de Indepaz (2022), durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque, esta es la radiografía de la crisis humanitaria y violaciones de derechos humanos. El informe registra los hechos ocurridos entre el 07 de agosto de 2018 y el 27 de julio de 2022:

Hechos violentos nivel Nacional	Hechos violentos nivel Región Pacífico
957 líderes/as y defensores de DDHH asesinados, de ellas 178 fueron mujeres asesinadas.	De estos hechos violentos la concentración en la región pacífico fue la siguiente: 1. Cauca: 340 2. Valle del Cauca: 117 3. Nariño: 151 4. El municipio de Tumaco fue el más afectado de todo el país, con 73 hechos de asesinatos de líderes, firmantes del acuerdo y masacres. 5. Los pueblos indígenas fueron víctimas de 305 hechos de violencia. 6. Los afrocolombianos de 44 hechos violentos.
261 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados	
313 masacres que dejaron 1.192 víctimas	
2.366 amenazas	
220 desapariciones forzadas	
555 secuestros	
29634 extorsiones	
446 eventos de confinamiento a comunidades	
545 eventos de desplazamiento forzado	
178 alertas tempranas emitidas por la defensoría del pueblo.	
83 homicidios en el marco del paro nacional 2021 y 66 montajes judiciales	

Los departamentos de la región Pacífico ocupan los primeros lugares en cuanto a asesinatos de líderes y lideresas sociales y étnicos, con las siguientes estadísticas: Cauca: 300, Nariño: 126, Valle del Cauca: 94 y Chocó: 51 reportes. Para una cifra total en el Pacífico de 571 asesinatos de los 1270 del total nacional reportados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta julio de 2022.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR (2022), en el primer semestre del año lectivo 2022 el desplazamiento y confinamiento de comunidades tuvo un impacto considerable en varias regiones del país. Según cifras oficiales, 29.729 personas se desplazaron de manera masiva en doce (12) departamentos. Los territorios del Pacífico colombiano fueron los más afectados por esta problemática, de manera particular, el departamento de Nariño que ocupó el primer lugar con el 43% de la población desplazada.

Asimismo, el desplazamiento individual afectó a 41.074 personas quienes tuvieron que abandonar sus hogares, gran parte de las veces por amenazas directas de los actores armados. Por otro lado, 19.210 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en los territorios; en el departamento de Chocó se concentró el 57% de la población confinada.

La crisis humanitaria no se detendrá y la paz territorial no será posible, si no hay una negociación política con el ELN y algún tipo de acuerdo para el sometimiento de los demás grupos armados ilegales; de forma tal, que se avance en el desescalamiento del conflicto armado hasta llegar a la paz total.

También, las comunidades y organizaciones étnico-territoriales mantienen la certeza y esperanza que el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, sigue siendo una gran oportunidad y herramienta para construir la paz territorial, que incluye la transformación de factores históricos y estructurales que dieron origen al conflicto en sus territorios. En estos cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, las comunidades del Pacífico y suroccidente han hecho diversas propuestas para superar la crisis humanitaria y para que las políticas públicas aporten efectivamente a la transformación de los territorios y a la superación de las desigualdades y exclusiones; sin embargo, estas, no tuvieron eco en el gobierno del presidente Duque.

Referencias

- Comité Internacional de la Cruz Roja- CICR (2022). Actualización sobre la situación humanitaria en Colombia, Tomado de: https://www.icrc.org/es/document/actualizacion-sobre-la-situacion-humanitaria-en-colombia-2022
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ (2022). Cifras durante el gobierno de Iván Duque. Balance de la violencia en cifras.

Fotografía: Matts Olsson

Mimetismo comunitario de actores armados "anónimos" en el pacífico

Por: Nubia Ximena Salamanca Rozo, Cooperante local AGIAMONDO- CRP

Fotografía: Matts Olsson

Por lo general los grupos armados ilegales se consideraron como actores externos a las comunidades, eran colonos o personas ajenas a los territorios étnicos y a las dinámicas socioculturales que se desarrollan como parte de la cotidianidad y el diario vivir de pueblos indígenas y comunidades afro del pacífico.

Desde hace un tiempo se viene hablando de la transformación que ha tenido la violencia y su aberrante expresión como es el conflicto armado en varias zonas de Colombia y de forma concreta, en la región del Pacífico, en los territorios colectivos habitados históricamente por los grupos étnicos indígenas y afro. Con el auge y fortalecimiento de las economías ilegales (producción y transformación de cultivos de uso ilícito, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas), los territorios étnicos se convierten en escenarios de constante enfrentamiento por el control territorial entre actores armados legales e ilegales, las amenazas, asesinatos, miedo y zozobra son la constante; se generan desplazamientos, reclutamientos forzados a menores y en los últimos años, confinamientos que devienen en situaciones insostenibles en términos de vulneración de derechos y crisis humanitaria en los territorios.

Estas transformaciones se deben en parte al cambio de ideologías e intereses (otrora a los que les dio origen) en varios actores armados, de las fragmentaciones, reorganizaciones, reestructuraciones y hasta mutaciones que han tenido algunos de estos grupos armados ilegales; nuevos nombres o denominaciones y nuevos "cabecillas" surgen en los territorios, de tal forma que si "muere o desaparece" alguno se erige un nuevo mando. Se ha llegado al punto, que, en algunos territorios es difícil distinguir con total exactitud a quién atribuir el mando de 'X' o 'Y' grupo armado, en contraste con el panorama que existía años atrás donde era factible identificar un mando unificado.

Por lo general los grupos armados ilegales se consideraron como actores externos a las comunidades, eran colonos o personas ajenas a los territorios étnicos y a las dinámicas socioculturales que se desarrollan como parte

de la cotidianidad y el diario vivir de pueblos indígenas y comunidades afro del pacífico. En muchas ocasiones las comunidades eran lugares de tránsito o paso para estos grupos armados ilegales, aun con todas las afectaciones que generaba el actor armado por pernoctar una noche o abastecerse a la fuerza de víveres. Pero estas dinámicas se fueron modificando, los grupos armados y quienes engrosaban sus filas comenzaron gradualmente a penetrar las dinámicas comunitarias, no solo para ostentar poder y control sobre los territorios, decidir sobre lo que se permite o no, sino peor aún, comenzaron a vivir y a establecerse dentro de estas comunidades que ya tenían dueños ancestrales, así que esconderse en el monte cuando "llegaban" los armados no fue más una opción para los pobladores.

Fotografía: Matts Olsson

Con el "establecerse" no solo se hace referencia al habitar en la comunidad, sino comenzar a erigirse como los nuevos referentes de autoridad y, desde este rol, impactar de forma contundente en la modificación de las costumbres de los pobladores, generar miedo, incertidumbre constante y cambios de mentalidad, de pensamiento, de ser, estar y cohabitar los territorios étnicos; se permeó y debilitó la identidad cultural al incorporar hábitos ajenos, muy diferentes a los ancestrales, al fortalecer la mentalidad sobre los beneficios de los cultivos de uso ilícito en los territorios étnicos y de paso, quedar inmersos en una economía rápida, en la cultura del "dinero fácil" y paulatinamente, hacer del narcotráfico una dinámica

cotidiana en los territorios étnico-colectivos, sin el consentimiento de muchos de sus habitantes.

Se comenzaron a mimetizar en las comunidades, utilizaron lo que algunos habitantes llaman la "estrategia del enamoramiento", empezaron a tener familia en estos territorios (en ocasiones a la fuerza) y de paso, a generar discrepancia de intereses a nivel generacional, los mayores adheridos a sus tradiciones se oponían a las nuevas mentalidades, en tanto que los más jóvenes veían todo este panorama como una posibilidad de mejorar la economía. Los malentendidos entre vecinos, amigos y familias comenzaron a generar atmósferas de desconfianza, los desacuerdos o disputas no resueltos aumentaban los rencores entre algunos habitantes afectando directamente el relacionamiento comunitario y la convivencia pacífica.

Esta situación no solo ocurría al interior de algunas comunidades, sino en la interacción entre unas y otras localidades, los niveles de desconfianza entre conocidos o vecinos de una a otra comunidad o zona aumentaron, al punto que "pensaban varias veces el solo hecho de saludar o no a un amigo o conocido que viviera donde estaba el grupo armado contrario, pues intrínsecamente ese saludo podía representar el que la persona quisiera obtener información para el actor armado de alguno de los bandos" (CIVP, 2022). Esto se puede explicar también porque los actores armados utilizaron otra estrategia, los denominados "puntos" o "informantes", que son miembros de las mismas comunidades que entregan información de interés para el accionar del actor armado, como movimientos en las comunidades de quiénes entran o salen, entre otra información.

De esta forma, los habitantes se fueron incorporando a las dinámicas de las estructuras armadas, llegando en algunos casos a entregárseles armas para el llamado 'patrullaje', armas que de una u otra forma brindan autoridad y poder de decisión sobre el cotidiano vivir y la vida misma de los pobladores y que, en ocasiones, son portadas por jóvenes o menores de edad, afectando la autonomía de las autoridades étnicas. A esto se suma el actuar en connivencia de los grupos armados ilegales con miembros de la fuerza pública que, bien sea por acción u omisión, dejan a los habitantes de las comunidades a merced de estos grupos y de paso, pone en evidencia la ausencia y/o debilitamiento institucional del Estado para proteger y salvaguardar los derechos constitucionales de los pobladores.

Este panorama generó conflictos intra-étnicos e interétnicos que aun hoy no se han logrado solventar, pero que evidencia las diferentes estrategias utilizadas por los actores armados para quebrantar la fortaleza de los grupos étnicos que es la identidad cultural y la unión por un objetivo común, como es la defensa de la vida y de los territorios colectivos.

Fotografía: Matts Olsson

Actualmente, en algunas comunidades étnicas del pacífico colombiano resulta difícil señalar a los grupos armados ilegales como agentes externos de las comunidades, puesto que algunos habitantes reconocen que sus hermanos, papás, tíos o primos forman parte de uno u otro grupo, lo cual hace aún más aberrante y degradante el conflicto armado en estos territorios, pues se acude a amenazas o asesinatos entre mismos familiares, amigos, vecinos y habitantes de una misma comunidad; el mimetismo es tal, que hoy algunos acompañantes de procesos étnico-comunitarios los denominan como "actores armados anónimos".

Por todo lo anterior, pensar en procesos de construcción de paz local, esclarecimiento de la verdad, reconocimiento de responsabilidades y alternativas de reconciliación en los territorios étnico-colectivos del litoral pacífico, debe partir por volver a generar la confianza perdida entre los habitantes, para efectos de reconfigurar y reconstruir el tejido social fragmentado por los hechos de violencia y el conflicto armado de largo aliento, fortalecer la cohesión social donde los grupos étnicos se articulen en objetivos comunes y puedan avanzar hacia procesos de armonización, convivencia comunitaria y pacífica o como se ha denominado el volver a "vivir saboroso" en sus propios territorios.

Referencias

- Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico- CIVP (2021). Etnocidio, daño al territorio y perspectivas de armonización. Tomo IV- Chocó: San Juan, Baudó y Costa Pacífica Chocoana. Región Pacífico Colombia. Recuperado de: https://verdadpacifico.org/informe-de-esclarecimiento-tomo-4/

Quibdó, Chocó. Fotografía: Matts Olsson

Sentencia de tutela 009/22 ¿una luz de esperanza para los asentamientos indígenas urbanos en Quibdó?

Por: Matts Olsson, Cooperante Internacional AGIAMONDO

La situación de las comunidades indígenas en situación de desplazamiento en Quibdó, está estrechamente relacionada a la falta de acceso a un territorio donde las comunidades puedan desarrollar sus actividades y sus vidas, acorde a su cultura proporciones.

La pintura azul de la casa del granero en el barrio Porvenir en Quibdó se está cayendo a pedazos, evidenciando los colores de anteriores intentos por embellecer. Esperando enfrente de la casa y rodeada por seis niños y niñas nos recibe Yumary Tatí Tatí, gobernadora indígena del asentamiento Eyaqueravia, que pertenece a la étnia Embera Dóbida. Cada uno de los seis niños cargan en las manos un bastón de mando y algunos se visten con el chaleco de la comunidad, dando a saber que ellos pertenecen a la guardia indígena juvenil del asentamiento. Yumary no solo es la gobernadora del asentamiento, también hace parte de la guardia indígena y enseña a niños, niñas y jóvenes valores básicos, idioma y cultura propia.

Durante la preparación de nuestra visita (Diego y Matts, dos cooperantes de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano - CRPC, apoyados por el Servicio Civil para la Paz y Agiamondo de la cooperación católica alemana), algunos líderes insistieron para que no entráramos solos al barrio: "aquí no manda el Estado colombiano" o "se debe de avisar antes, para que puedan entrar sin problema" puntualizan algunos de ellos.

En la CRPC sabemos de la existencia y aumento de la presencia y conflictos entre bandas criminales en los diferentes barrios de Quibdó, quienes controlan el microtráfico de drogas y la extorción de los pequeños negocios. El grupo que controla el barrio el Porvenir ha impuesto control social riguroso, controlando quien sale y quién entra al barrio, con toques de queda para la población indígena a partir de las cinco de la tarde.

Eyaqueravia está ubicada a menos de cinco minutos de la escuela de Policía en Quibdó, pero esto no garantiza una presencia permanente de este ente estatal; "la patrulla viene de vez en cuando durante el día, pero jamás después de que oscurezca", expone otro liderazgo del territorio.

De la Crisis Humanitaria a la Vida Digna¿Hay Esperanza?

Yumari es Embera Dóbida de Bojayá, llegó a Quibdó siendo niña junto con su familia a causa de un desplazamiento forzado provocado por amenazas a sus padres. Ella es una de más de 2400 personas de las étnias Wounaan, Guna Dule, Embera Katio, Chamí, Dóbida y Eyabida que viven en la ciudad de Quibdó, como resultado de los desplazamientos forzados que han sido provocados desde que la guerra se instaló en Chocó. Como se reseña en 'Tierras en el Consejo Comunitario de Cacarica' (s.f.), por la entrada de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia- AUC en 1997, apoyados por el Ejército Nacional en acciones como las conocidas "Operación Génesis" y "Operación Cacarica", para despojar tierras donde la extinta guerrilla de las Farc-EP habían hecho presencia desde el inicio de la década de los ochenta.

El conflicto armado ha traído consigo despojos de tierra, masacres y asesinatos de civiles, violencia sexual y amenazas que son algunos de los hechos victimizantes o prácticas ilegales de la guerra (según el Derecho Internacional Humanitario – DIH), que han llevado a que Quibdó, hoy, cuente con 24 asentamientos indígenas de diferentes etnias, de las cuales, la mayoría llevan décadas luchando contra condiciones de vida deplorables y marginación dentro de la ciudad.

Sin embargo, el 11 de enero de 2022 una juez del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Quibdó, decide que esta situación de vulneración de derechos fundamentales no puede continuar así, declarando a la población indígena en Quibdó como sujeto de reparación y procesos de restitución de derechos mediante la Sentencia de Tutela No 009 de 2022. Dich sentencia, establece que a esta población le ha sido vulnerados los derechos a la vida digna, al territorio, a la alimentación (soberanía alimentaria), a la pluriculturalidad, al derecho de petición, a la vivienda digna y al agua.

Fotografía: Matts Olsson

declarando a la población indígena en Quibdó como sujeto de reparación y procesos de restitución de derechos mediante la Sentencia de Tutela No 009 de 2022. Dich sentencia, establece que a esta población le ha sido vulnerados los derechos a la vida digna, al territorio, a la alimentación (soberanía alimentaria), a la pluriculturalidad, al derecho de petición, a la vivienda digna y al agua.

Con dicha sentencia de tutela y en segunda instancia, la Juez en Quibdó otorga un plazo un (1) año y ordena al Estado Colombiano a reubicar a no menos de 15 de los 24 asentamientos, para que puedan acceder a condiciones de vida que garanticen sus derechos fundamentales y la no repetición de las vulneraciones.

El accionante de la tutela, el procurador regional del Chocó, Andrés Felipe Correa Cárdenas, expone:

Esta tutela nace por iniciativa de la Diócesis de Quibdó que nos presenta la situación de las comunidades indígenas en el territorio[...]. Las organizaciones (de indígenas en condición de víctimas del conflicto armado y ubicados en Quibdó) Atich, Avwounq y Asowpich en Quibdó han presentado un sinnúmero de peticiones a administraciones anteriores (inclusive la Procuraduría) donde no habían tenido respuesta para la protección de sus derechos. (Entrevista Andrés Felipe Correa, 2022).

Berlin Chamapuro de la étnia Wounaan es otro joven líder de los asentamientos indígenas en Quibdó, él afirma que la situación de vulnerabilidad de derechos ha sido histórica, pero cuidadosamente indica que la iniciativa de la Procuraduría Regional puede ser el inicio del cambio:

El procurador regional (Andrés Felipe Correa Cárdenas) vio el abandono total de la población indígena, víctima del conflicto armado y nos acompañó a hacer una demanda (acción de tutela) de las instituciones competentes. Ganamos la sentencia a favor de la población víctima, pero en los primeros seis meses de la sentencia no hemos visto avances significativos y sólo faltan seis meses para que se cumpla el plazo. (Entrevista Berlin Chamapuro, 2022).

Las organizaciones de indígenas, las víctimas en la ciudad de Quibdó, la Diócesis de Quibdó y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano- CRPC siguen el desarrollo del cumplimiento de dicha sentencia de tutela. Algunas instituciones como la Unidad para las Víctimas han realizado jornadas de inclusión en sus registros, al igual que la Registraduría, pero las grandes inquietudes que quedan son: ¿dónde terminarán las familias de los 15 asentamientos incluidas en el fallo? y ¿cómo la institucionalidad colombiana va a asegurar que en los lugares de reubicación, la población pueda acceder a la integralidad de sus derechos, entre otro, el derecho de vivir sin actores armados que les controlen y limiten sus rutinas diarias?

Fotografía: Matts Olsson

En junio de 2022, seis meses después de la sentencia de tutela, la CRPC visitó seis (6) asentamientos indígenas urbanos en Quibdó y en todos, la población expresa que allí sigue presentándose problemáticas relacionadas a las economías familiares, el acceso a la alimentación, al agua y al saneamiento; la infraestructura educativa es insuficiente e inadecuada y en una de nuestras visitas, pudimos evidenciar entre las casas, jóvenes armados pertenecientes a las bandas que controlan cada una su fracción de territorio urbano.

Finalmente, Berlin Chamapuro expresa que la situación de las comunidades indígenas en situación de desplazamiento en Quibdó, está estrechamente relacionada a la falta de acceso a un territorio donde las comunidades puedan desarrollar sus actividades y sus vidas, acorde a su cultura y recuerda, que la institucionalidad vinculada en la sentencia de tutela en mención a lo largo de este artículo, tiene plazo hasta enero de 2023 para cumplir.

Referencias

- Entrevistas a líderes y lideresas indígenas en la ciudad de Quibdó (2022).
- Entrevista a Procurador Regional- Andrés Felipe Correa (2022).
- Sentencia de tutela No. 009 del 11 de enero de 2022. Bogotá (2022)
- Tierras en el Consejo Comunitario de Cacarica (s.f.). Recuperado de: https://rutasdelconflicto.com/especiales/licencia-despojo-uraba/cacarica.html

¿Hay perspectiva de futuro para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Chocó? Suicidio en comunidades indígenas

Por: Nubia Ximena Salamanca Rozo, Cooperante local de investigación AGIAMONDO- CRPC

"No es porque se quieran morir los muchachos, sino por la misma situación que se está presentando en los territorios a causa del conflicto armado, en dichos territorios no hay libertad [ ] el conocimiento ancestral tampoco lo estamos practicando, no tenemos como antes teníamos los jaibaná1 o médico tradicional" (Entrevista Mariela Lana, 2022).

Fotografía: Matts Olsson

La intensidad con que los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos de la región del Pacífico han vivido y sufrido en sus propios territorios el conflicto armado en los últimos treinta (30) años no tiene límites. Un sinfín de intereses e ideas de desarrollo colonialistas sobre los territorios étnico-colectivos, han llevado a la implementación de grandes megaproyectos extractivos, de infraestructura, la explotación indiscriminada de recursos naturales, la instauración de monocultivos, el apogeo del narcotráfico, el auge de diversos actores armados legales e ilegales aunados a las constantes confrontaciones por la disputa del control territorial, entre otros factores, han resultado lesivos, no solo para el ambiente, sino para la totalidad de los territorios y quienes los habitan.

Los grupos étnicos del Pacífico han estado inmersos en un contexto de violación y vulneración sistemática de sus derechos fundamentales; la sumatoria de todos estos factores ha desencadenado graves afectaciones y daños en los territorios colectivos, territorio que también es reconocido como víctima. Las afectaciones también se evidencian sobre el ser y estar, la identidad cultural, las espiritualidades propias, los proyectos de vida como sujetos, y los comunes, como los familiares y los comunitarios, tanto de indígenas como de afrodescendientes. Este contexto se exacerbó durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque con el aumento de las violencias, el conflicto armado y la crisis humanitaria vivida en estos territorios de la región Pacífico en general, y del departamento del Chocó en particular.

En medio de esta situación insostenible, hay un fenómeno que ha llamado fuertemente la atención de los grupos étnicos en el Chocó, tiene que ver con la creciente práctica del suicidio en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (en adelante NNAJ). La CIVP en su informe de esclarecimiento de la verdad (2021) en relación con población afro del Baudó reseña en relación con este tema en jóvenes que, "[...] se disparan, hay varios muchachos con síntomas de querer quitarse la vida, porque del 99 para acá los jóvenes no han sabido cómo afrontar

la violencia" (CIVP, 2021). Aun así, el fenómeno se presenta con mayor fuerza en los pueblos indígenas.

El líder indígena Alberto Achito considera que no hay razón alguna para explicar por qué un niño que está en etapa de jugar, de bañar, ir al monte y en proceso de aprendizaje de la cultura propia, se suicida. Aun así "escucho a las niñitas pequeñas de 3, 4 o 5 años decir "Ah yo quiero morirme", o "usted no me quiere" esos términos no sé de dónde están saliendo", a lo cual la lideresa Mariela Lana afirma que "los niños de hoy nacen como con otra mentalidad". Sin embargo, expone que últimamente se han presentado suicidios de niños entre 8 a 13 años y las razones por las que los jóvenes se están suicidando, están ligadas con las limitaciones de movilidad que imponen los grupos armados, impidiendo el intercambio de productos entre comunidades, la mano cambiada y por el creciente confinamiento, acciones a todas luces que van en detrimento de los derechos indígenas.

"Las limitaciones, restricciones, control y amenazas que hacen los grupos armados dentro de las comunidades son constantes y generan progresivamente sentimientos de desesperanza y de no querer seguir viviendo", aduce Achito. La situación se torna más alarmante para los liderazgos, puesto que actualmente los grupos armados están viviendo dentro de las mismas comunidades, utilizan muchas veces a los habitantes, principalmente adolescentes o jóvenes, como "campaneros", "puntos" o informantes, permitiéndoles a los armados controlar a diario toda la movilidad de la gente dentro de las comunidades, "ellos diario están mirando a dónde van, qué hacen, qué dejan de hacer, hacia dónde viajan y todo eso se transmite por conectividad, además los retenes son permanentes con sus puntos de comunicación, nadie puede andar tranquilo, la gente anda con esa zozobra" indica Achito.

Por su parte la lideresa Mariela Lana expone que "no es porque se quieran morir los muchachos,

"No se está permitiendo ir a cazar, ni a pescar, ni a recolectar las cosechas, ni a sembrar que es lo que nos preocupa, porque es toda una acción en contra de la población civil y en contra de los indígenas, sobre todo, quieren es como asfixiarnos para que nosotros entremos en una depresión, lo que está generando problemas de salud, de hambre y de inseguridad". (Entrevista Alberto Achito, 2022).

Alberto Achito. Fotografía: Matts Olsson

sino por la misma situación que se está presentando en los territorios a causa del conflicto armado, en dichos territorios no hay libertad [...] el conocimiento ancestral tampoco lo estamos practicando, no tenemos como antes teníamos los jaibaná o médico tradicional" (Entrevista Mariela Lana, 2022). De hecho, una de las afectaciones relacionadas con el conflicto armado tiene que ver con la aculturación, el quebrantamiento de la identidad, la ruptura de referentes culturales y todo lo que esto conlleva, pues los actores armados tienen gran responsabilidad y así lo expresa el líder Achito, haciendo referencia al adoctrinamiento que hacen los grupos armados a los jóvenes:

"La inculcación permanente de enseñarle o insinuarle al joven indígena a no obedecer a las autoridades, no seguir el camino de nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestras creencias, los están obligando a que tienen que seguir las reglas o pensamientos de guerra que ellos tienen, sobre todo, enseñarles a matar, enseñarles a odiar, enseñarles a codiciar, qué es lo que está generando rupturas, fraccionamiento social en las familias, en la comunidad y como pueblo indígena". (Entrevista Alberto Achito, 2022).

Todo este adoctrinamiento hecho hacia los jóvenes se da en un contexto de violencia permanente, reclutamiento forzado, falta de oportunidades de estudio, trabajo y debilitamiento cultural. El acoso a jóvenes indígenas tanto mujeres como hombres para ingresar a los grupos armados es permanente. En consecuencia, los líderes entrevistados exponen que una vez los jóvenes ingresan a las filas de los grupos armados, en ocasiones les obligan a matar a otros compañeros indígenas o incluso, a miembros de su propia familia, generando problemas internos en las comunidades por asesinatos entre jóvenes y/o deviniendo en el fenómeno del suicidio, por no acatar dicha orden.

Peor aún, cuando los jóvenes deciden desertar, puesto que vienen las represalias hacia la familia, la comunidad y las autoridades étnicas, los jóvenes desertores son asechados, perseguidos y monitoreados por los "puntos" o informantes hasta hacer un cerco, situación que lleva al joven al suicidio para evitar ser apresado o causar mayor dolor a su familia.

Fotografía: Matts Olsson

Según relatan los líderes indígenas del Chocó, desde la época de los 90 se presentaron los primeros suicidios en la zona de Riosucio "porque estaba muy fuerte la guerra de las AUC contra las FARC y los del ELN, todo se recrudece en la medida en que haya confrontación armada y haya presencia de grupos armados permanente en los territorios" explica Achito. Con lo cual Mariela asevera que actualmente "los territorios indígenas más afectados por el fenómeno del suicidio están en las cuencas de los tres afluentes principales Atrato, Baudó y San Juan haciendo referencia específica al Medio Atrato, especialmente el río Bojayá, así como el Medio y Bajo Baudó y el Bajo San Juan, porque en estos territorios las confrontaciones son permanentes".

De hecho, exponen que durante los años de gobierno de Duque la violencia se incrementó de una forma exacerbada y se ciñó contra los territorios étnicos, tanto indígenas como afro. La lideresa Mariela apunta que los grupos armados ilegales, guerrilla y paramilitares, se han quedado en las comunidades, por eso "los desplazamientos y violencia fue más duro que otros presidentes que habían estado antes, con Duque se generó mucho más [...] En las comunidades indígenas también hay muchos muertos, los jóvenes y líderes en las comunidades, no sabemos ¿qué vamos a hacer?".

Por su parte, Alberto Achito muestra que el gobierno de Duque tiene gran responsabilidad en la situación de violencia y crisis humanitaria vivida en los territorios colectivos del Chocó, puesto que el haber acabado con la mesa de negociación que se adelantaba con la guerrilla del ELN, fue un grave error que dio vía libre a que estos grupos llegaran a las comunidades indígenas y se fortalecieran "porque cuando se tienen sentados en una mesa al menos se pueden controlar, la estrategia perfecta fue acabar con el diálogo de paz y no hacer nada frente a la situación de las comunidades que se desarrollaba entre, confinamientos, asesinatos, amenazas, desplazamientos" (Entrevista Alberto Achito, 2022).

el gobierno de Duque tiene gran responsabilidad en la situación de violencia y crisis humanitaria vivida en los territorios colectivos del Chocó, puesto que el haber acabado con la mesa de negociación que se adelantaba con la guerrilla del ELN, fue un grave error que dio vía libre a que estos grupos llegaran a las comunidades indígenas y se fortalecieran

Fotografía: Matts Olsson

En este orden de ideas, llegar a comprender o intentar explicar el fenómeno del suicidio que se ha presentado en NNAJ de pueblos indígenas del Chocó, debe hacerse desde una lectura integral e integradora del contexto y las distintas realidades explicitadas a lo largo de este texto, que está llevando a los pueblos indígenas al límite. Por ello, lo crucial está en vislumbrar perspectivas de acción para hacer frente a este fenómeno, allí las siete organizaciones regionales indígenas que existen en el Chocó intentan avanzar con ejercicios de investigación, a través de los jóvenes liderazgos para dar cuenta de las causas de este fenómeno y aportar pautas de acción, aún así, es importante mencionar que, los más de treinta años que lleva el conflicto armado en los territorios étnicos del Chocó ha afectado los procesos étnico-organizativos e incluso, varios liderazgos son amenazados por los grupos armados o no pueden hacer presencia permanente de acompañamiento en los resguardos.

Ante realidades como las que los NNAJ se están acostumbrando a ver, como muertes o el presunto "poco valor de la vida", "lo urgente es hacer un trabajo para desintoxicar la mente o que las nuevas generaciones vuelvan a entender que la vida si es sagrada y que la convivencia es el mejor camino, que la paz es el mejor camino" afirma Alberto Achito. Asimismo, se deben implementar actos de limpieza y armonización de los territorios, complementa Mariela, "las nuevas generaciones deben escuchar a los mayores y mayoras, pues ellos poseen la sabiduría y el conocimiento, buscando orientar a los NNAJ, para darles consejo con el objetivo de mejorar y que cambien de actitud.

Finalmente, los lideres y lideresas indígenas del Chocó, ante el interrogante "¿qué quieren los pueblos indígenas?", concuerdan al mencionar que lo único que quieren es que los dejen vivir en paz y con dignidad en sus propios territorios, pero para ellos, es imprescindible generar escenarios de diálogo con todos los actores armados, pues confían en la solución del conflicto por la vía pacífica y del diálogo, ya que ha quedado demostrado que, por la vía de la confrontación, no se ha logrado nada y si han sufrido los grupos étnicos:

"Que nos dejen sembrar, que nos dejen vivir en nuestro territorio, en nuestros resguardos, que no nos bloqueen el mercadeo de nuestros productos, al contrario, abran el mercadeo y para eso, la única solución es sentarse a dialogar con todos los grupos armados, aquí no se puede pensar que uno es malo y el otro no, que uno es político y el otro es de barbarie, no, toca sentarse con toda esta gente". (Entrevista Alberto Achito, 2022).

Referencias

- Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico- CIVP (2021). Etnocidio, daño al territorio y perspectivas de armonización. Tomo IV- Chocó: San Juan, Baudó y Costa Pacífica Chocoana. Región Pacífico Colombia. Recuperado de: https://verdadpacifico.org/informe-de-esclarecimiento-tomo-4/
- Entrevista al líder Alberto Achito y la lideresa Mariela Lana, indígenas del departamento del Chocó (2022).

¿Existen oportunidades para las presentes y futuras generaciones en la costa pacífica chocoana?

Por: Nubia Salamanca Rozo, Cooperante local AGIAMONDO y Eric Bejarano, Cooperante Internacional AGIAMONDO

A través de estas denuncias se hace un llamado urgente, exigiendo al Estado y actual gobierno, para que actúe en consecuencia con su deber constitucional de promoción y protección de los derechos de sus ciudadanos y genere acciones contundentes para detener la grave situación humanitaria que se vive en los territorios de las comunidades étnicas chocoanas.

Los grupos étnicos han resultado fuertemente afectados a lo largo y ancho del Pacífico, especialmente en el departamento del Chocó que, en los últimos cuatro años, desde el inicio del gobierno Duque, ha visto cómo la violencia ha llegado a límites inconmensurables y ha devenido en una grave crisis humanitaria que a diario deben afrontar los pobladores de comunidades afro, indígenas y campesinos del departamento.

La situación ha sido denunciada en varias oportunidades por parte de las autoridades de los Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas del Chocó, así como por plataformas defensoras de derechos humanos y organismos de control nacional e internacional que acompañan estas comunidades. A través de estas denuncias se hace un llamado urgente, exigiendo al Estado y actual gobierno, para que actúe en consecuencia con su deber constitucional de promoción y protección de los derechos de sus ciudadanos y genere acciones contundentes para detener la grave situación humanitaria que se vive en los territorios de las comunidades étnicas chocoanas.

La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC) a través de conversatorios y diálogos comunitarios adelantados en la cabecera municipal de ciudad Mutis, en el corregimiento de El Valle y en el corregimiento El Brazo con comunidades indígenas, generó espacios de escucha, donde los pobladores expusieron de viva voz la grave situación que se vive en torno a la violencia, al conflicto armado, a los actores armados, a la violación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a la violación de los derechos humanos y étnico-colectivos que afecta a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres por igual, sin ningún tipo de distinción.

Las amenazas, intimidaciones, extorsiones, asesinatos indiscriminados, reclutamientos forzados, desplazamientos y confinamientos son parte del panorama que actualmente se vive en las comunidades de Bahía Solano y que cada día se recrudece aún más. Según cifras e informaciones recolectadas, hasta el mes de abril del presente año, 18 jóvenes habían sido asesinados en el casco urbano de ciudad Mutis; asimismo, en 2020 fueron asesinadas 17 personas, en 2021 fueron asesinadas 18 personas y en 2022, hasta el mes de abril, se contaban 5 personas asesinadas violentamente.

Fotografía: Matts Olsson

Fotografía: Matts Olsson

Los grupos armados ilegales ejercen total control sobre los territorios y las vidas de los habitantes, sobre las formas de ser y estar, sobre las dinámicas de relacionamiento comunitario, sobre los horarios, impidiendo la libre movilidad de sus pobladores para desarrollar tareas cotidianas, como cazar o cultivar, que redundan en crisis de autonomía y seguridad alimentaria, entre otros; aspectos que evidencian el poder coercitivo que ejercen estos grupos armados y que sumen a la población en miedo constante y una ley del silencio para salvaguardar sus propias vidas.

Las relaciones sociales se han visto afectadas por el fenómeno de la permanencia de los grupos armados ilegales y la convivencia de estos con las comunidades, esta situación ha dado paso al debilitamiento y, en algunos casos, a la ruptura total de vínculos familiares, resultando en casos más extremos como la persecución y los conflictos personales entre miembros de una misma familia; en especial entre los jóvenes y adolescentes. Entre otros elementos, lo anterior ha generado la ampliación del conflicto a un ámbito íntimo familiar, incrementando la magnitud de los daños generados como resultado de esta convivencia.

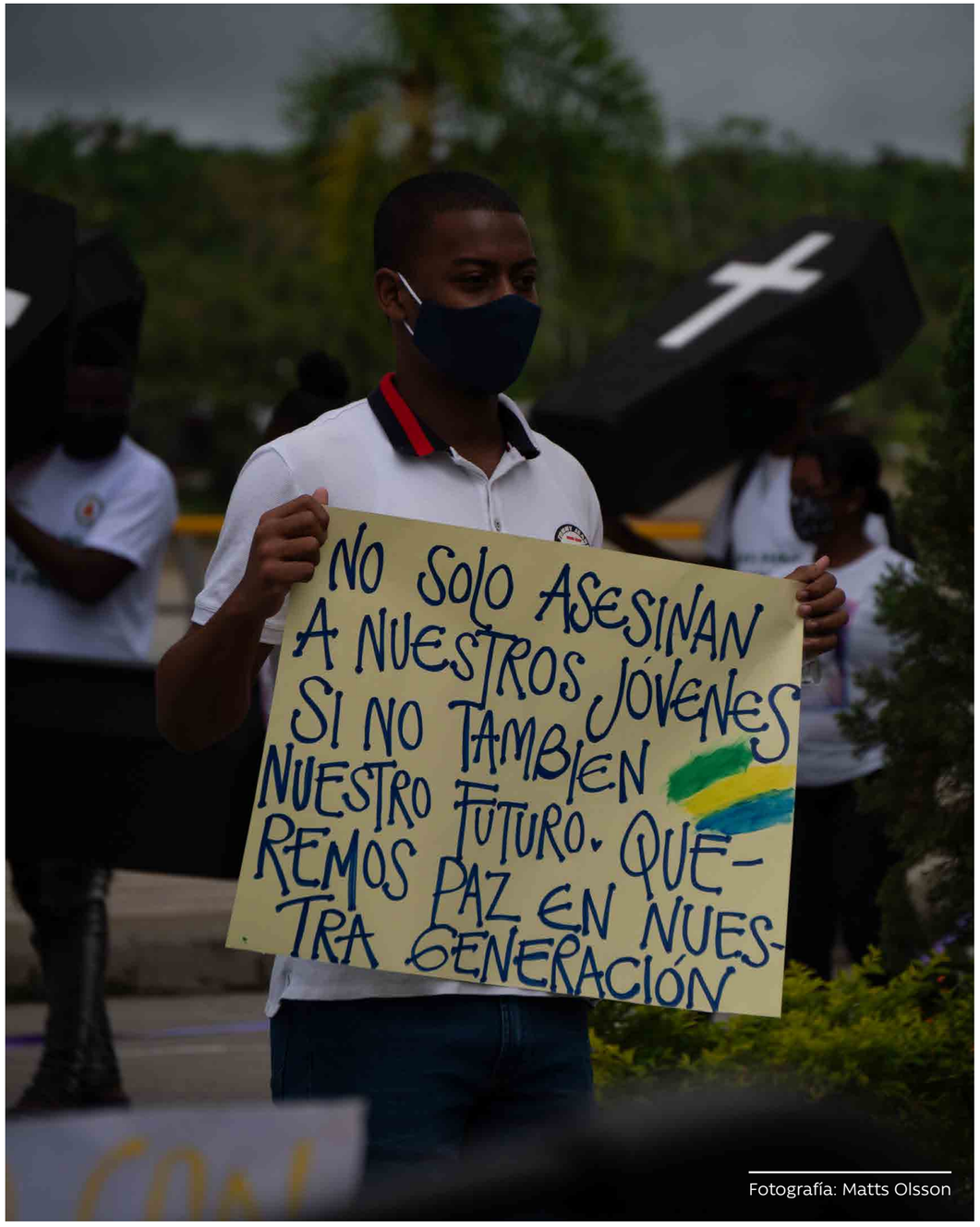
La consolidación de las economías ilícitas en la subregión; narcotráfico, cultivos ilícitos, tala de madera, entre otras actividades, han generado una multiplicidad de afectaciones, lesionando las estructuras más profundas sobre las cuales se levantaban los sistemas culturales y sociales que hacían viable la forma de vida de los grupos étnicos de la región.

En los escenarios de la niñez, adolescencia y juventud, los testimonios describen la degradación y perdida de los valores y referentes de autoridad tradicionales como consecuencia de la implantación de nuevas creencias y referentes de autoridad provenientes de la realidad del narcotráfico y las economías ilícitas. De alguna manera se puede llegar a hablar de un proyecto sociopolítico "a favor de" y basado en las economías ilícitas, de un modelo social el cual viene coaptando toda la subregión en sus múltiples dimensiones, afectando en mayor medida a las nuevas generaciones, quienes encuentran aquí dificultad en la toma de las decisiones para su propio presente y futuro, donde nada se puede orientar sin tener en cuenta, como principio básico y primera posibilidad, los espacios y oportunidades que vienen brindando las economías ilegales.

Otro fenómeno ligado a las economías ilegales es la denominada "pesca blanca", que es la actividad de salir a buscar los paquetes de cocaína que las embarcaciones transportadoras de los narcotraficantes han tirado al mar cuando la Policía los persigue o intercepta, o salir a buscar al mar los cargamentos que salen a flote y que provienen de las embarcaciones que por "X" o "Y" motivo se han hundido en el trayecto entre Colombia y Panamá. La mayoría de las personas que se dedican a esta actividad son los jóvenes, quienes venden el contenido de la "pesca" o reciben dinero, trabajo o algún otro tipo de recompensas por parte de los dueños de los paquetes con cocaína. En algunos casos, estos paquetes también son comprados a los jóvenes por otros grupos ilegales que no son los directos dueños, y, en algunas ocasiones, son comprados por algunos sectores de la fuerza pública que están ligados con fenómenos de narcotráfico y connivencia.

El narcotráfico, aunado a la violencia que se despliega a su paso, ha permeado de forma determinante las dinámicas comunitarias y de relacionamiento en Bahía Solano, generando graves daños como la pérdida de los lazos de confianza entre los mismos habitantes de las comunidades de la zona, puesto que se reconoce que en estos grupos armados han incursionado habitantes, principalmente adolescentes y jóvenes, de las mismas comunidades, así se expresa en algunos relatos de habitantes al indicar que antes "la gente se paraba y decían a los grupos armados, aquí no entran, pero ahora no se puede porque en ese grupo está el hermano, el sobrino, el tío".

En ese sentido, el conflicto armado en Bahía Solano se debe comprender desde otras lógicas, no se puede hacer una lectura implícita de los grupos armados ilegales como agentes externos a las comunidades, por el contrario, se debe incluir la variable que estos grupos han permeado las dinámicas colectivas comunitarias y familiares, cooptando las voluntades de



Fotografía: Matts Olsson

De la Crisis Humanitaria a la Vida Digna¿Hay Esperanza?

miembros de las comunidades, principalmente adolescentes y jóvenes para hacer parte de estos grupos, con lo cual, se puede inferir que parte de la misma población tiene algún grado de involucramiento o hace parte de estos grupos armados ilegales. Según relatos de los habitantes de la zona, los territorios actualmente son el microcosmos de la realidad de Colombia, antes se sacaba la droga, no la consumían, pero desde 2005 la empezaron a dejar en el territorio para el consumo y se ha convertido en un tema de salud pública, por los problemas de salud mental asociada al consumo, así como a la prostitución y enfermedades de transmisión sexual.

Se evidencia una total ausencia del Estado Social de Derecho en el municipio de Bahía Solano y, de forma especial, en las comunidades étnicas que allí habitan. La ausencia genera que la promoción, protección y garantía de los derechos sea nula y, por ende, se vulnere y viole constantemente los DESCA de la población, ante la violencia sistemática que se vive en los territorios. Esta situación puede entenderse como una problemática multinivel que afecta fuertemente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes sufren reclutamientos forzados o son permanentemente cooptados por parte de estos grupos armados ilegales, con promesas económicas o de poder ante la falta de oportunidades reales en educación, en deportes y recreación, o incluso laborales en los territorios, por lo que muchos acceden con cierta obligatoriedad.

"La situación es crítica con los jóvenes, se van de las Instituciones Educativas por falta de recursos u oportunidades, porque allá afuera les ofrecen un sueldo de un millón para ponerse un arma en la cintura y servir de 'campaneros'. En 2020 con la pandemia hubo mucha deserción escolar, y de regreso a clases, hay muchos estudiantes que ya están muertos y otros en la selva o en el monte". (Relatos habitantes).

Algunas estadísticas sobre educación recolectadas en las poblaciones afro e indígena, tanto de las zonas urbanas y rurales, dan cuenta de las dificultades que viven los NNAJ de esta subregión:

"En la Institución Educativa María Auxiliadora hay alrededor de 1660 estudiantes en las diferentes sedes rurales y urbanas [...] para estos estudiantes el espacio no se convierte en bálsamo, si no que se puede aumentar el riesgo por el hacinamiento que se vive, en bachillerato hay alrededor 800 estudiantes, así como en la primaria otros 800 [...] y solo hay una (1) docente orientadora que es Trabajadora Social, por eso se requieren más trabajadoras sociales y psicólogos". (relatos población afro).

"En la sede rural indígena de Institución Educativa María Auxiliadora son pocos los estudiantes indígenas que terminan el 11, solo 3, 4 o 5 que lo terminan. En 2021 terminaron 3 hombres y 1 mujer, en 2022 hay 5 estudiantes en el grado 11, de los cuales 3 son hombres y 2 son mujeres". (relato población indígena).

Se constata entonces la crisis humanitaria que se vive y acrecienta día a día en los territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas, tanto en la zona urbana como en las rurales del municipio de la costa chocoana de Bahía Solano, con lo cual se insta al Estado para que tome las medidas pertinentes y genere acciones contundentes que contrarresten o den solución a la grave situación que vive y lleven alivio a las comunidades de esta subregión que tanto lo necesitan, especialmente con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son el presente de la región, pues son ellos los generadores y constructores de un verdadero futuro donde existan oportunidades y se pueda vivir en Paz, con dignidad en los territorios.

Referencias

- Relatos, conversaciones y diálogos con población indígena y afro de la subregión Costa Pacífica Chocoana en 2022.

Salsa y sangre: Juventud afro y violencia urbana en Cali

Por: Red de Comunicación Étnico-Popular de la Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali

No sorprende que la mayoría de los puntos de resistencia durante el estallido social se ubicaran precisamente en estas zonas marginadas y excluidas. Los bloqueos evidenciaron la geografía de segregación de la ciudad, fue un grito de jóvenes sin futuro contra la injusticia social y en defensa de sus derechos socioeconómicos.

Cali es una ciudad alegre, acogedora y llena de energía. Al mismo tiempo, es pobre, violenta y racista. Salsa y sangre, sucursal del cielo y del infierno, son tensiones que los habitantes de la tercera ciudad más poblada del país viven a diario.

Es una urbe que creció de forma masiva en los últimos 60 años por el desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, y sigue creciendo cerca de 25.000 habitantes cada año. Si en un auditorio de la Universidad del Valle se les pregunta a los estudiantes: ¿quién nació en Cali?, la mayoría levantan la mano; pero, si se hace la misma pregunta sobre sus padres, la mitad bajan la mano y aún más, si se pregunta respecto a sus abuelos. Cali es, por consiguiente, el principal receptor de migrantes del suroccidente de Colombia, sobre todo, personas de comunidades negras del Pacífico nariñense, caucano y vallecaucano. Se destaca, en la demografía caleña y del occidente colombiano, el alto porcentaje de población afrocolombiana que se aproxima al 26% de la población total de la ciudad.

Cali también es una ciudad joven, según estadísticas DANE (2021) el grueso de la población es menor de 40 años. Solamente las personas entre 15 y 29 años representan un cuarto del total, es decir, la generación propicia para estudiar o trabajar. Asimismo, la mayoría de población del género masculino oscila entre los 20 y 29 años; sin embargo, las perspectivas laborales y los índices de pobreza evidencian que aproximadamente la mitad trabaja de manera informal.

Fotografía: Andreas Hetzer

Fotografía: Andreas Hetzer

Durante la pandemia, la capital vallecaucana recibió varios golpes económicos y sociales. El índice de pobreza monetaria en Colombia para 2020 aumentó 6,8 puntos porcentuales y se ubicó en 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos no pueden suplir sus necesidades básicas. La pobreza monetaria pasó en Cali de 21,9 % a 36,3 % entre 2019 a 2020; el desempleo creció de 12% en 2019 a 20,4% en 2020; la cifra es mayor respecto al promedio nacional de 9,5% y de 13,8% para los mismos años. (DANE, 2021).

La población SISBEN actualizada a junio de 2019, alcanzó una cobertura del 60,2% del total, quienes habitan en su gran mayoría (50%) en el oriente de Cali (comunas 13, 14, 15, 16 y 21), zonas de la ciudad con bajo estrato socioeconómico y de mayor población afrodescendiente.

Su exclusión socioeconómica y su desigualdad se relacionan con el racismo estructural, demarcan su geografía y la vuelven altamente segregada; los barrios con mayor población afrodescendiente coinciden con los barrios de estratos más bajos y con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas.

La institucionalidad y la sociedad en general niegan esa exclusión racial, pero según Codhes (2021) en el análisis étnico-racial de la violencia de agentes del estado durante el estallido social:

Son numerosos los estudios que muestran el nivel de racismo estructural, que se manifiesta en la negación de los derechos básicos y fundamentales que padece la población afrodescendiente; los bajos índices de acceso a educación de calidad, empleo, salud y vivienda digna, y su poca participación en la vida política y en la toma de decisiones. (Codhes, 2021).

Pero la pobreza no afecta de manera homogénea a todos los grupos de edad. América Latina mantiene altos niveles de pobreza e indigencia que tienden a crecer y en las ciudades su incidencia sobre la población juvenil es mayor, de acuerdo con la CEPAL (2004). Las encuestas de hogares muestran que las tasas de desempleo son mayores para la población juvenil entre 15 y 29 años, lo que aumenta la vulnerabilidad de este grupo; esta tendencia en Cali se empecina con las comunas del oriente y la ladera, que tienen menos empleo y más informalidad.

No sorprende que la mayoría de los puntos de resistencia durante el estallido social se ubicaran precisamente en estas zonas marginadas y excluidas. Los bloqueos evidenciaron la geografía de segregación de la ciudad, fue un grito de jóvenes sin futuro contra la injusticia social y en defensa de sus derechos socioeconómicos. Así lo expresó un joven de primera línea en Puerto Resistencia: “por primera vez en mi vida me levanto motivado y sé qué hacer durante el día: estar en el bloqueo con mis compañeros. No tengo miedo de que me maten porque no tengo nada que perder” y le encanta la salsa a todo volumen y bailar con mujeres en las discotecas, tal cual como miles y miles de personas en la “capital de la salsa”.

En fin, vivir y sobrevivir en el oriente de Cali como joven no es nada fácil y menos, si se es afro proveniente de una familia desplazada.

Fotografía: Andreas Hetzer

La palabra es ‘sobrevivir’ la situación socioeconómica en el oriente es la de una emergencia humanitaria; se relaciona con el narcotráfico y otras estructuras ilegales que sí cooptan a adolescentes, e incluso menores de edad. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la Alcaldía de Cali realizaron en 2019 un estudio sin precedentes en el país, donde identificaron 182 estructuras delincuenciales que serían responsables de gran cantidad de homicidios selectivos, hurtos y extorsiones. El 79% de estos grupos criminales se concentrarían en el oriente (comunas 13, 14, 15, 16 y 21) y en la ladera de Siloé (comuna 20), en la periferia occidental de la ciudad.

Siguiendo con el estudio, en estos territorios se cometieron más de la mitad de los 7.109 homicidios registrados entre 2014 a 2018, muestran una diferencia significativa si se comparan con las otras comunas. La Secretaría de Seguridad de Cali presentó a finales de 2020 y con cierto orgullo, la tasa más baja de homicidios en los últimos 30 años, lo que significa que casi 3 personas mueren por día. El informe anual 2021 del Observatorio de la Seguridad de la misma Secretaría indica incluso un aumento del 14%, en comparación con el promedio de homicidios en todo 2020. Es decir, fueron 1.123 homicidios en total y se repitió la geografía del horror para el oriente y la Comuna 20.

Fotografía: Andreas Hetzer

La misma investigación local responsabiliza a las pandillas por el alto índice de homicidios y no a los grandes clanes delincuenciales; quienes las integran serían menores de edad consumidores de estupefacientes y pertenecientes a los estratos 1 y 2, muchos de ellos no superan una esperanza de vida de 24 años; controlan el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, cobran vacunas y limitan la movilidad de las comunidades con "fronteras invisibles", asegurando así su "status quo delictivo".

La dinámica de la violencia urbana es distinta a la de la zona rural., a pesar de tener un alcance geográfico limitado, las pandillas terminan vinculadas a grandes bandas criminales, cometen delitos que van desde el cobro de extorsiones, hasta los asesinatos selectivos. Cali es un enlace estratégico para el tráfico de estupefacientes desde la cordillera central (una de las regiones con mayor producción de cocaína en el país) hacia el océano Pacífico; por ello, en el Valle del Cauca las grandes bandas criminales subcontratan actividades delictivas con grupos ilegales urbanos.

Mantener estos negocios ilegales en los microterritorios de la gran ciudad requiere del reclutamiento forzado de jóvenes, menores de edad a los que muchas veces se les prometen mejores condiciones de vida o simplemente, una moto o dinero. Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de inicios de 2022, sobre la presencia de grupos armados del narcotráfico, alarmó a la Policía y la Administración Municipal. Líderes sociales junto a madres del oriente de Cali y de la zona de la ladera, denunciaron indicios de reclutamiento.

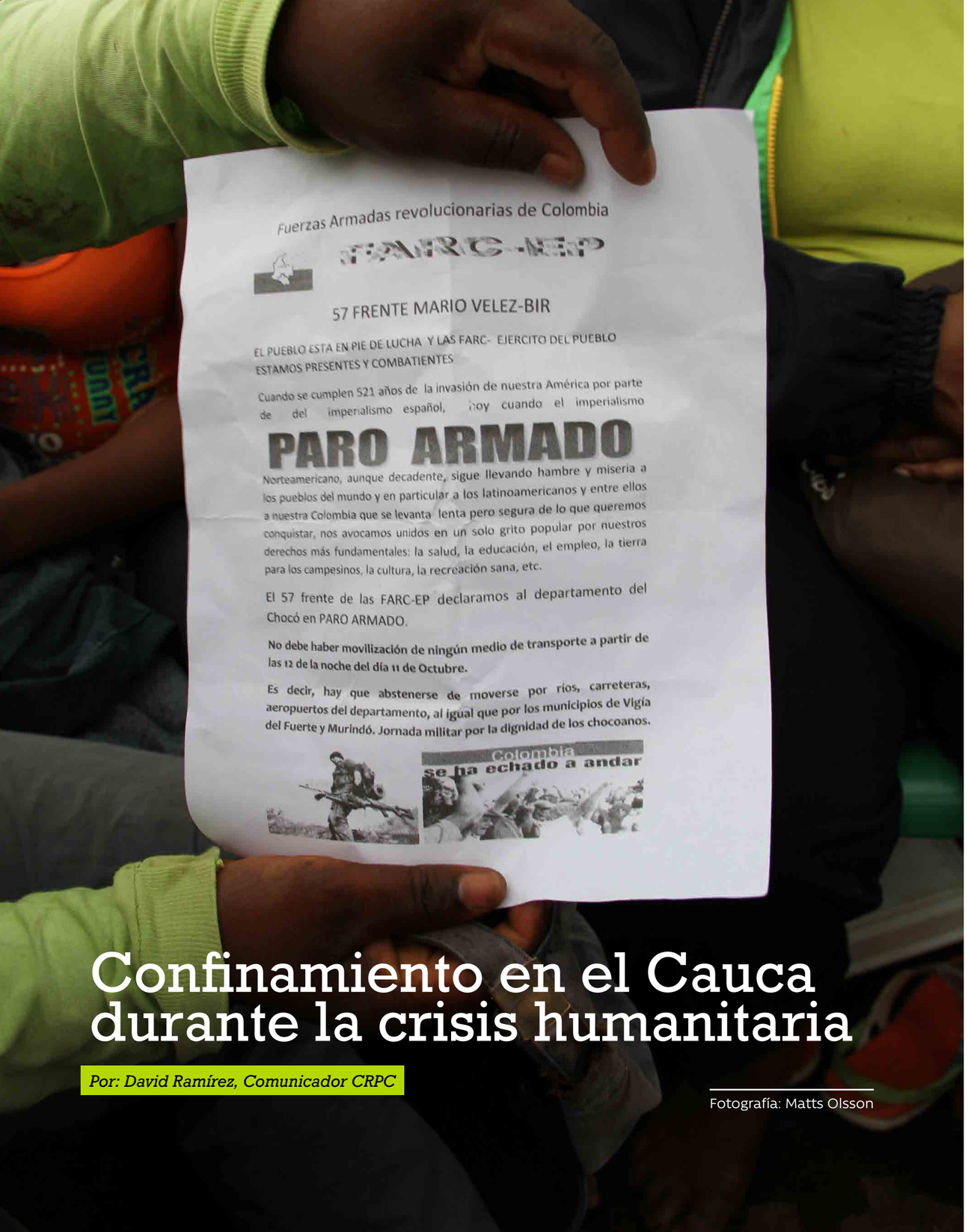
Uno de los barrios más afectados fue Llano Verde, donde, en agosto de 2020, fueron asesinaron cinco (5) jóvenes en un cañaduzal. "Aquí se recluta para microtráfico, se recluta para las mal llamadas oficinas de sicariato, se recluta para grupos alzados en armas; entonces la dinámica realmente es violenta", señaló Erleny Cuero, coordinadora de Afrodes Cali. Los organismos del Estado intentan frenar estos delitos con la presencia territorial de los servicios de justicia, el ICBF y de la policía; anunciaron recompensas de hasta $50 millones de pesos por información que permita identificar los grupos al margen de la ley.

Este panorama estadístico permite comprender la coexistencia entre salsa y sangre en Cali; hay una correlación entre marginación socioeconómica, estructuras ilegales y homicidios, sobre todo, en zonas con mayor población afrodescendiente. Le da razón a quienes denuncian un "jovenicidio" en la ciudad, porque la mayoría de las víctimas son adolescentes y jóvenes que no pasan de los 30 años.

La falta de perspectivas y la escasa inversión social mantienen los barrios marginados atrapados en dinámicas de delincuencia, narcotráfico y violencia. Muchas vidas y sueños de jóvenes afrodescendientes se pierden de forma sistemática; es una de las caras más espantosas del racismo estructural de la sociedad colombiana.

Referencias

- Alcaldía de Santiago de Cali y Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNODC (2019). Informe final del proceso de implementación de la metodología de Auditorías de Seguridad en Santiago de Cali. Documento Técnico de Soporte para la Política Pública de Seguridad y Convivencia de Santiago de Cali. Bogotá.
- Caicedo-Hurtado, M. y Castillo-Valencia, M., (2021). "Tipologías de pobreza en Cali: un análisis con base en el SISBEN" Tendencias, 22 (1), pp. 39-70. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de: https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/article/view/6175/6920
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL y Organización Iberoamericana de la Juventud (2004). La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias. Santiago de Chile. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2785/1/S2004083_es.pdf
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES (2021). Análisis étnico-racial del uso excesivo de fuerza por parte de los agentes del Estado en Cali. Informe preliminar. Cali. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de: https://codhes.wordpress.com/2021/05/21/cali-informe-preliminar-expone-practicas-racistas-de-la-policia-de-colombia-durante-el-paro-nacional-y-advierte-frente-al-riesgo-de-genocidio/
- Departamento Nacional de Estadística-DANE (2021). Pobreza monetaria en Colombia, 2020. Comunicado de prensa. Bogotá: Gobierno de Colombia. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Comunicado-pobreza-monetaria_2020.pdf



Confinamiento en el Cauca durante la crisis humanitaria

Por: David Ramírez, Comunicador CRPC

Fotografía: Matts Olsson

Esta crisis humanitaria tuvo una afectación social territorial, cambiando las dinámicas colectivas y desgajando la vida de las comunidades debido a la desculturización y desterritorialización que sufrieron muchos de los jóvenes pertenecientes al territorio.

La región del Pacífico Colombiano ha sido una región olvidada por las instituciones estatales, ya sea por su intrincada geografía o por la exclusión histórica avalada por el racismo estructural, puesto que gran parte de la región es habitada por comunidades étnicas indígenas y afros, grupos que se ven afectados por esa ausencia del Estado, cuyo lugar ocupan grupos armados y estructuras criminales que se disputan el territorio y el control del narcotráfico.

Durante el 2020, el mundo se vio afectado por la pandemia COVID-19 por lo que muchos gobiernos tomaron medidas de confinamiento para sus pobladores, presentándose en Colombia, específicamente en la región del Cauca, un doble confinamiento tanto por la pandemia, como por la presión que ejercen los actores armados en el marco de la crisis humanitaria.

La Coordinación Regional del Pacífico (CRPC), la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP), el Cinep, Comundo, la Corporación PODION, entre otras organizaciones, se unieron a la alerta temprana emitida por COCOCAUCA, en la cual hicieron el llamado a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, denunciando "el recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca… pues los actores armados se aprovechan de la actual crisis del Coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población…" (COCOCAUCA, 2020).

Esta situación generó una gran crisis social en los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, lugares donde los jóvenes dejaron de recibir clases, oportunidad que aprovecharon los actores armados ilegales para convencerlos de trabajar en cultivos de uso ilícito o de hacer parte de estas estructuras criminales.

Para Orlando Pantoja, líder de COCOCAUCA, esta crisis humanitaria tuvo una afectación social territorial, cambiando las dinámicas colectivas y desgajando la vida de las comunidades debido a la desculturización y desterritorialización que sufrieron muchos de los jóvenes pertenecientes al territorio.

"el recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca… pues los actores armados se aprovechan de la actual crisis del Coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población…"

Fotografía: Matts Olsson

Este doble confinamiento devino en el llamado "Paro Armado" anunciado por el ELN durante el 2020 y parte del 2021, hecho que no tuvo una respuesta contundente por parte del gobierno, puesto que, para Orlando, la respuesta:

Del gobierno Duque fue lenta e incompleta, la fuerza pública tuvo presencia en algunos territorios descuidando otros, asimismo, aplicaron mal la política del confinamiento enviando alimentos sin tener en cuenta las particularidades de la dieta de los habitantes del Pacífico, además estas ayudas fueron tardías e inconstantes, lo que hacía imperante encontrar un ingreso para poder subsistir, por esta necesidad muchos decidieron hacer parte de las dinámicas de violencia que se ven en la región. (Entrevista Orlando Pantoja, 2022).

Debido a lo anterior, la poca producción de alimentos, la capacidad de ingresos disminuida por el confinamiento y la subida de los precios de la canasta familiar, fueron caldo de cultivo para el estallido de esta crisis humanitaria que aún tiene algunos rezagos dentro de las comunidades de esta región; lo cual tiene un impacto negativo en los grupos ancestrales que habitan estos territorios, pues estas dinámicas violentas representan un retroceso para diversos procesos que se venían llevando a cabo en estos municipios.

COCOCAUCA reafirma la "vocación pacífica de estas comunidades que abogan por la paz con justicia social, como fundamento para que sigan existiendo los grupos étnicos". Este rechazo a la violencia es la razón de ser de estas comunidades que buscan mantener su identidad cultural y sus tradiciones ancestrales.

Se espera que, con el nuevo gobierno y su inclinación hacia el diálogo con los distintos actores armados, mejore la situación de la Región Pacífica, específicamente en el Cauca, una zona bastante olvidada, donde la paz quiere empezar a escucharse desde las voces que han vivido durante todas estas décadas la violencia desgarradora.

Referencias

COCOCAUCA (2020). Comunicado "Alerta Crisis Humanitaria en el Cauca". Tomado de: https://www.cinep.org.co/es/comunicado-alerta-por-crisis-humanitaria-en-cauca/

Entrevista líder Orlando Pantoja (2022).

Las mujeres afros e indígena de la costa pacífica caucana resisten en los territorios ante la crisis humanitaria que viven en estos territorios

Por: Magaly Portocarrero Obregón, Comunicadora comunitaria RedPesca.

Cabe resaltar que muchas mujeres víctimas del desplazamiento y en condiciones de vulnerabilidad de la zona urbana y rural de los tres municipios de la costa caucana, han tenido la oportunidad de acceder a semillas para la siembra y cultivo de pancoger gracias a los programas de seguridad alimentaria que realiza el Vicariato Apostólico de Guapi.

Fotografía: Matts Olsson

Las mujeres de la costa pacífica caucana que viven cambios de roles sociales como consecuencia de la guerra que afrontan en esta región, le apuestan a la seguridad alimentaria de sus familias.

Los departamentos que conforman la costa del pacifico colombiano, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chochó han sido los principales escenarios de guerra durante el conflicto armado colombiano. Su ubicación geográfica estratégica, de grandes extensiones de selva, y el océano pacífico han sido los atractivos para que los grupos al margen de la ley se instalaran en estas zonas y comenzaran su accionar delincuencial.

Las particularidades del conflicto armado y su desarrollo en estas zonas del país han tenido varias etapas estos últimos cuatro años, desde la firma de los acuerdos de paz. En el marco político, económico y social, las comunidades de la costa caucana (Guapi, Timbiquí y López de micay) se han visto afectadas por una nueva fase: los actores armados pasaron de vivir en las selvas, a convivir y operar directamente en las zonas urbanas y rurales de estos municipios.

Por lo anterior, se han incrementado problemáticas como el narcotráfico, el microtráfico, la pobreza, el desplazamiento, las confrontaciones entre

grupos armados y la fuerza pública; la zozobra de la sociedad civil debido al control de los grupos armados ilegales, como consecuencia de la ausencia del estado en los territorios; el cobro de vacunas a comerciantes locales, el control de las mafias sobre las embarcaciones fluviales que transportan mercancías y víveres del puerto de Buenaventura a los municipios de la costa; el alza de los productos de la canasta familiar y materiales de construcción; el aumento de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la falta de credibilidad de las autoridades locales, el reclutamiento a jóvenes, las amenazas a lideres, lideresas y excombatientes; a causa de estas problemáticas, se viene presentando en los territorios una fragmentación comunitaria, porque no hay garantías sobre los derechos sociales, económicos y culturales.

Fotografía: Matts Olsson

La situación de las mujeres afro e indígenas de la costa caucana, frente a la crisis humanitaria que se vive en estas zonas, es el riesgo permanente a la vulneración de sus derechos fundamentales, a la esclavitud y violación sexual, la prostitución forzada, los embarazos no deseados como consecuencia de esto. Muchas mujeres se han visto obligadas a cambiar sus estilos de vida, a los roles sociales que por años fungían deben sumarle ahora los roles que los hombres de estas comunidades asumían en sus hogares, donde a campea el machismo, haciéndose evidente en las comunidades afro e indígenas.

Por otra parte, las mujeres afro e indígenas que resisten en los territorios ante la crisis humanitaria, le apuestan a la seguridad alimentaria para satisfacer las necesidades básicas de sus

La situación de las mujeres afro e indígenas de la costa caucana, frente a la crisis humanitaria que se vive en estas zonas, es el riesgo permanente a la vulneración de sus derechos fundamentales, a la esclavitud y violación sexual, la prostitución forzada, los embarazos no deseados como consecuencia de esto. Muchas mujeres se han visto obligadas a cambiar sus estilos de vida

Fotografía: Matts Olsson

hogares, se dedican a los cultivos de pancoger; con la siembra de yuca, papa china, caña, arroz, plátano, y las hiervas de azotea, las cuales, una vez recolectada la cosecha, se pueden comercializar en los mercados locales (galerías), logrando solventar las necesitades alimenticias de sus familias y fortaleciendo sus tierras con cultivos lícitos.

Cabe resaltar que muchas mujeres víctimas del desplazamiento y en condiciones de vulnerabilidad de la zona urbana y rural de los tres municipios de la costa caucana, han tenido la oportunidad de acceder a semillas para la siembra y cultivo de pancoger gracias a los programas de seguridad alimentaria que realiza el Vicariato Apostólico de Guapi en su labor social junto a las comunidades que están en su jurisdicción. Es por lo anterior que hoy en día podemos ver muchas mujeres que han logrado empoderarse para mejorar la seguridad alimentaria en estas zonas de la Región Pacífica.

Las transformaciones económicas y sociales a las que las mujeres afro e indígenas le están apostando para resistir ante la crisis generada por los estragos de la guerra y el abandono estatal, nos lleva a reflexionar, dándole una mirada a la guerra, más allá de las consecuencias negativas que por décadas han permeado los territorios de Colombia, específicamente en los tres municipios costeros del departamento del Cauca.

530 años después indígenas Awá siguen sobreviviendo al exterminio

Por: Yesid Idrobo, Periodista e integrante de la RedPesca

Fotografía: Matts Olsson

El pueblo Awá, asentado en los territorios fronterizos de Nariño y Ecuador, sobrevivieron a la espada de la colonización española y hoy 530 años después, resisten para intentar sobrevivir a los fusiles de más de 18 grupos armados que hacen presencia en sus territorios.

No ha sido uno, ni dos, ni tres los llamados urgentes que el pueblo Awá ha hecho para que el Estado los proteja. Ninguno parece haber sido escuchado porque la violencia armada sigue sin dar tregua en sus territorios. El último episodio, la masacre número 58 ocurrida durante el año 2022 en Colombia, tuvo lugar el 31 de julio en el municipio de Barbacoas, Nariño, en ella, cuatro indígenas Awá fueron asesinados y dos más resultaron heridos.

Después de cinco siglos la historia de violencia sobre los pueblos indígenas parece seguir igual, una realidad en la que "el pueblo Awá es un pueblo que siempre hemos resistido, hemos afrontado históricamente múltiples adversidades, múltiples factores de riesgo que siempre nos ha puesto en ese peligro de extinción", dijo Floriberto Canticus Bisbicus, Consejero Secretario General de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá -UNIPA-, en una rueda de prensa 11 días después de la masacre del 3 de julio ocurrida en Tumaco donde fueron asesinados tres indígenas, pero 20 días antes de la última. Así de difícil es la situación para este pueblo, no han terminado de enterrar a sus hermanos y hermanas cuando deben empezar a cavar nuevas tumbas.

Una grave crisis humanitaria que amenaza la vida de alrededor de 25 mil indígenas Awá organizados en 32 resguardos que viven en los territorios colectivos de los municipios nariñenses de Ricaurte, Roberto Payan, Samaniego, Barbacoas y Tumaco.

Aunque las armas sean el pan de cada día, parte del paisaje en sus zonas, Floriberto Canticus afirma que el pueblo Awá no se ha prestado para la guerra porque "es un pueblo de la paz y de la armonía" que se ha enfocado en construir planes de vida, una vida que para la cosmovisión de comunidades ancestrales está ligada al territorio, por eso su presencia en estos se da a partir de una constante lucha por defenderlo, reexistir, aunque eso en medio de una guerra sin tregua signifique, como lo dicen los liderazgos, ponerse la lápida encima, pero son los riesgos que se asumen cuando se defiende la vida y el territorio en el país más peligroso del mundo para el liderazgo social.

¿Quién los está exterminando? ¿Por qué? Hay varias respuestas. La primera responsabiliza al Estado Colombiano por su incapacidad de cuidar sus vidas tal como lo manda la Constitución de Colombia. De nada ha servido el Auto 004 emitido en 2009 por la Corte Constitucional en el que le ordenaron al Estado proteger con urgencia los derechos fundamentales de personas indígenas. Trece años después los Awá le siguen recordando al Estado y los gobiernos colocar en marcha lo dispuesto por la Corte, así como la implementación del Acuerdo de Paz.

Mientras sobreviven a la desidia y el abandono estatal, deben enfrentar también en solitario las disputas por el poder territorial que los actores armados han desatado a sangre y fuego para controlar el negocio del narcotráfico, la minería, la explotación maderera, una guerra que provoca en las comunidades confinamiento, desplazados, desapariciones forzadas, homicidios.

La situación los ha llevado a movilizarse a través de la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad, una iniciativa que desde el 2009 vienen realizando para denunciar y seguir insistiendo en los llamados para que tanto el Estado como los actores armados ilegales respeten sus vidas, su autonomía.

Ahora que hay en marcha un gobierno alternativo, que se ha manifestado a favor de la Paz, la implementación del Acuerdo de Paz, abierto al diálogo con los actores armados, los Awá han lanzado de nuevo un grito desesperado a la espera que de que por fin sus llamados sean escuchados y eso les salve la vida.

Planes de desarrollo con enfoque interétnico para el cuidado de la vida y la Paz territorial en el Pacífico nariñense

Por: Diego Candelo Meza, Cooperante local AGIAMONDO y Elizabeth Arango, Coordinadora oficina prensa y comunicaciones Alcaldía El Charco- Nariño

Fotografía: Diego Candelo Meza

El rol de las lideresas y líderes políticos hoy será importante en términos de la respuesta institucional que debe darse a la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades del Pacífico nariñense. El primer paso debe ser una transición en las narrativas en torno a este aspecto: pasar de una narrativa la guerra y violencia hacia una de esperanza, que nos conduzca al logro de la Paz

Es a través de un Plan de Desarrollo orientado hacia la Paz, la defensa de la vida y el cuidado de los más vulnerables, un plan que fortalezca las economías amigables con el cuidado de la casa común, aquella en la que tanto ha hecho énfasis el Papa Francisco.

Colombia necesita más que siempre escenarios de reconciliación, un llamado urgente desde la realidad actual, especialmente, aquella que viven los pueblos étnicos del Pacífico nariñense, sin desconocer que es una coyuntura que se da en toda la región en general.

La reconciliación es un primer paso, la génesis de una nueva historia para Colombia, para el Pacífico. El rol de las lideresas y líderes políticos hoy será importante en términos de la respuesta institucional que debe darse a la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades del Pacífico nariñense. El primer paso debe ser una transición en las narrativas en torno a este aspecto: pasar de una narrativa la guerra y violencia hacia una de esperanza, que nos conduzca al logro de la Paz.

En esto, es apremiante la articulación de procesos desde distintas esferas sociales y políticas, sumado, a ese llamado a la acción que nos permita luchar contra las inequidades históricas de nuestros territorios y fortalecer las distintas estrategias en torno a la educación, la salud, la seguridad ciudadana y todos los temas que hacen parte de la agenda pública de esta región.

El tejido social, fracturado luego de más de 50 años de conflicto, debe regenerarse, como en tiempos antiquísimos se construyó a partir de las relaciones y los espacios de intercambio cultural, social y económico. La cultura ha permitido potencializar la grandeza de los pueblos; ella, junto con el arte, han marcado una hoja de ruta en los procesos de reconciliación y construcción de la Paz en Colombia. La cultura ha construido y reconstruido la memoria colectiva y basados en esas prácticas que ancestralmente se han desarrollado en estos territorios, el país ha crecido desde diferentes perspectivas, sin ignorar aquellas limitantes que hoy tienen a un país dividido y un tejido social fragmentado. Estas inequidades han puesto en riesgo el bienestar del pueblo, especialmente de quienes más sufren, producto de la injusticia social.

Fotografía: Diego Candelo Meza

El sufrimiento y la incertidumbre causados por el conflicto armado interno se vivió en todos los rincones de Colombia, pero fueron y siguen siendo más destructores y persistentes en las comunidades étnicas, por varias razones, entre ellas, una ubicación geoestratégica para el desarrollo y potencialización de economías ilegales, que generan rentas para unos cuantos y profundas inequidades para la gran mayoría de los habitantes.

Las poblaciones del litoral Pacífico construyen una identidad con las montañas, las selvas, los ríos y con el mar. Territorios donde el Estado no llega de manera integral, porque es incapaz de comprender plenamente la diversidad étnica, cultural y las inmensas deudas históricas de exclusión y racismo prevalecientes, a pesar de los esfuerzos constitucionales por reconocer una nación pluriétnica y multicultural.

Recientemente, en su discurso de posesión el presidente Gustavo Petro reafirmó su intención de trabajar por la Paz en Colombia, con énfasis especial en la implementación del acuerdo de Paz de 2016, así como las recomendaciones dadas por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad- CEV. Un mensaje que invoca a que la dicha y el progreso sean nuestra identidad; y para que la paz sea posible en nuestros pueblos, debemos acabar con más de 50 años de violencia y un conflicto armado incesante, a partir de diálogos y consensos en los territorios, los cuales, se deben construir desde la diferencia y plantear pistas sobre cómo superar los episodios de violencia y muerte.

Es a través de un Plan de Desarrollo orientado hacia la Paz, la defensa de la vida y el cuidado de los más vulnerables, un plan que fortalezca

las economías amigables con el cuidado de la casa común, aquella en la que tanto ha hecho énfasis el Papa Francisco. Esto nos permite generar un impacto positivo que busque que nuestros pueblos, históricamente golpeados por el narcotráfico, puedan vivir dignamente, con sus derechos respetados, protegidos y garantizados por un Estado Social de Derecho.

Colombia requiere hoy de un Plan de Desarrollo que esté sustentado en la construcción de lineamientos y acciones orientadas en el marco institucional de la Administración Pública, con enfoque al desarrollo de las comunidades. Esto debería ser prioridad, que se planteen rutas que representan la convergencia territorial en torno a la construcción de un futuro común, que parte del reconocimiento de las potencialidades y la identificación de los desafíos a enfrentar para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, haciendo hincapié también, en la búsqueda de una Paz basada en el esclarecimiento de la verdad, la construcción de memoria y la reconciliación, como ejes esenciales.

La verdad histórica, política y ética es crucial para la construcción de Paz, así lo expresa la Comisión de la Verdad. Nos compete a todos y supone conversaciones sobre las posibilidades de futuro, por eso lideresas y líderes sociales, étnicos y campesinos, empresarios, jóvenes, académicos, periodistas, funcionarios gubernamentales y líderes políticos debemos unirnos a este llamado en nuestra región. Las entidades territoriales deben basar sus iniciativas en la construcción de verdad como agente de desarrollo comunitario. Las distintas acciones emprendidas desde los municipios, así como las que se gestan desde el gobierno central, deben estar ligadas a ese búsqueda y reconocimiento de las voces de las comunidades, esto permite una articulación realista en torno a las distintas políticas públicas, que buscan desarrollar los componentes de lo social, vida y desarrollo en los territorios.

Fotografía: Diego Candelo Meza

Generar espacios de intercambio para avanzar hacia la reconciliación de los pueblos debe ser prioridad de los gobiernos locales, como lo es para el nuevo gobierno, el cual pretende acciones en comunión con la construcción de Paz para el desarrollo de Colombia. Así lo expresó el presidente Gustavo Petro en su discurso:

La Paz es posible si desatamos en todas las regiones un diálogo social para escucharnos en medio de la diferencia porque la sociedad debe conversar sobre cómo no matarnos más. No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el de la vida. (Petro, Gustavo (2022), Discurso de posesión presidencial).

La prioridad en la destinación presupuestal debe estar en componentes que fortalezcan el desarrollo humano: salud, condiciones dignas laborales, acceso a pensión y educación. Habría un gran logro si se prioriza en los presupuestos

locales, departamentales y en el nacional, a la educación: la infraestructura educativa, estrategias pedagógicas para docentes y estudiantes, fortalecer los procesos de etnoeducación, reales condiciones de acceso y que esto vaya más allá de un asunto meramente discursivo.

Lograr la sociedad del conocimiento, invertir en la educación es clave para pensar el progreso, el desarrollo y la justicia social; es allí donde surge la necesidad de apostarle especialmente a la educación para la Paz, un proceso de participación en el cual debe desarrollarse la capacidad crítica.

Sin embargo, en los presupuestos, el gasto público destinado a la educación se encuentra siempre en la balanza entre lo urgente y lo importante, entre los problemas a corto plazo y las necesidades a largo plazo del país. Desde las regiones y bajo la articulación del gobierno nacional, hay que pensar el rol trascendental de la educación en el posconflicto para la reconstrucción, la reintegración y la reinserción social, una oportunidad también de restablecimiento y recomposición de los derechos humanos y de los valores sociales, a través de varias dimensiones con enfoque diferencial.

El gobierno nacional debe convocar al país para repensar el actual modelo de ordenamiento territorial implementado en las regiones distantes del centro del país, donde se concentra el poder. Las comunidades de estas regiones viven con altos niveles de desprotección que las hace más vulnerables a la violencia, a la injusticia social, a las necesidades básicas insatisfechas y a Objetivos de Desarrollo Sostenible que no alcanzan a ser garantizados.

Al Estado, la sociedad y, particularmente, al empresariado de los grandes proyectos industriales y financieros, corresponde dar prioridad para garantizar condiciones de bienestar y vida digna a las personas y las comunidades, desde una visión compartida de futuro para superar las desigualdades estructurales que hacen de este país uno de los más inequitativos del mundo en la concentración de los ingresos, la riqueza y la tierra.

Referencias

- Petro, Gustavo. (2022, agosto). Discurso de posesión presidencial. Bogotá D.C.

Fotografía: Diego Candelo Meza

Responsabilidad del Gobierno de Iván Duque frente a la Crisis Humanitaria en la región del Pacífico Colombiano

Por: Diego Pérez Guzmán, asesor CRPC

Fotografía: Matts Olsson

El Pacífico, como territorio y como pueblos étnicos, siendo una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, (tal como fue ampliamente documentado en el informe final de la Comisión de la Verdad y por los cinco informes publicados por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico).

Fueron cuatro años de desconocimiento del gobierno del expresidente Iván Duque del territorio del Pacífico colombiano, del enfoque étnico diferencial de sus políticas y de **permanente negación de la crisis humanitaria y de derechos humanos** que vive la región.

La crisis humanitaria, de sistemática violación de derechos humanos y colectivos y de infracciones al derecho internacional humanitario, en la Región Pacífico de Colombia, fue documentada y denunciada, durante los cuatro años del gobierno Duque, por los más importantes organismos internacionales de derechos humanos, agencias humanitarias del sistema de Naciones Unidas, Iglesias, organizaciones étnico-territoriales y organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

A pesar de ello, el gobierno de la administración Duque permaneció impávido, descalificó los informes y denuncias, renunció al enfoque diferencial étnico y territorial que le mandataba no sólo la constitución política sino también el acuerdo de paz, recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos y varias sentencias de la Corte Constitucional que, todas confluyen en el deber del Estado de garantizar la protección de los pueblos y comunidades étnicas, considerados sujetos de especial protección.

La mayor expresión de la irresponsabilidad (constitucional) del gobierno Duque frente a la crisis humanitaria, violencia política y violaciones de derechos humanos en la región se evidenció frente al informe público de las Misiones Humanitarias realizadas por las Iglesias y un conjunto de organizaciones humanitarias en el departamento del Chocó durante el 2021:

Fotografía: Matts Olsson

La respuesta del alto gobierno, en cabeza del Ministro de Defensa Diego Molano, del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila y del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta TITAN Brigadier general Oscar Leonel Murillo fue señalar que *"no estaban de acuerdo con las denuncias hechas por las organizaciones"*, exigir *"rectificación de las afirmaciones"* e interponer *"una acción de tutela"* contra Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de la diócesis de Quibdó, por "*supuesta violación del derecho al buen nombre y a la honra de la fuerza pública"*.

A este respecto la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, manifestó su preocupación por estas reacciones del gobierno, el 10 de diciembre de 2021 en la conmemoración del día de los derechos humanos en Tumaco, en donde manifestó:

"es absolutamente inaceptable que se cuestione lo planteado por las organizaciones e iglesias, no se puede ejercer coerción a quienes hicieron estas denuncias, ahora los están interpelando para que se retracten. Nuestra propia Oficina en este 2021 hasta el 31 de octubre, hemos registrado 45 personas asesinadas defensoras de derechos humanos en el pacífico (Valle, Nariño, Cauca y Chocó), 10 masacres y dos desapariciones"

En sentido similar se pronunció a través de una Sentencia el Tribunal Permanente de los Pueblos:

El presidente Duque rechazó el informe del Tribunal de los Pueblos (2021) que señaló la existencia de un **genocidio sistemático de los pueblos étnicos,** que no solo se estructura bajo el ataque sistemático a la pervivencia cultural de los pueblos, sino que a través de un racismo estructural del Estado que se expresa en cuatro vectores: i) Falta de garantías de seguridad, protección y de no repetición para los pueblos étnicos; ii) Regresividad en el derecho de la Consulta Previa Libre e Informada; iii) Baja capacidad institucional y voluntad política, re- flejada en la escasa asignación presupuestal; iv) El evidente desconocimiento institucional de los compromisos establecidos con los pueblos étnicos en el Acuerdo de Paz.

En 2022, (26 de julio) nuevamente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) preocupado por la crítica situación, afirmó que el enfoque militarista, unido al déficit de instituciones civiles, no logró detener la expansión de los grupos armados ilegales —tanto actores no estatales como organizaciones criminales—. La implementación del Acuerdo de Paz, tal y como se firmó en 2016, se vio mermada por el desinterés político del gobierno de Iván Duque, quien además echó a andar una política paralela de "paz con legalidad" que difiere de lo inicialmente acordado. Manifestó que "Muy preocupantes son las denuncias de que un grupo de congresistas y personal del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría montaron un esquema para robar más del 10 por ciento de los fondos destinados a los proyectos de paz". Este asunto debe ser investigado con rapidez y se deben tomar medidas en los primeros meses del próximo gobierno.

El Pacífico, como territorio y como pueblos étnicos, siendo una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, (tal como fue ampliamente documentado en el informe final de la Comisión de la Verdad y por los cinco informes publicados por la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico) la respuesta que recibió del gobierno Duque fue:

- La negación de violaciones sistemáticas de derechos humanos, étnicos y colectivos,
- El reduccionismo interpretativo de que la violencia en el pacífico se debe únicamente a los grupos criminales y narcotráfico;
- Las organizaciones étnicas y territoriales son aliadas de las guerrillas y demás grupos ilegales.
- Allí se han fortalecido las disidencias de las FARC.

Fotografía: Matts Olsson

De la Crisis Humanitaria a la Vida Digna¿Hay Esperanza?

- Negación de la existencia de convivencia entre fuerza pública y grupos paramilitares, actividades económicas ilegales de extracción minera y otros recursos naturales, corrupción y narcotráfico.
- Desconocimiento de que el territorio ha sido y sigue siendo afectado por el conflicto armado; no aplicación de las órdenes de la Corte Constitucional en la sentencia T-622 sobre el río Atrato como sujeto de derechos; retroceso en los derechos y procedimientos referidos a la consulta previa y consentimiento libre e informado y aplicación de consultas previas "virtuales"; no inclusión de varias iniciativas comunitarias en los tres PDETs Pacífico[4] y la no asignación de los recursos necesarios para su implementación, además de no incluir a las organizaciones territoriales en la operación de los proyectos y programas PDETs; profundas deficiencias en la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz.
- La principal respuesta estatal y gubernamental, ante la crisis humanitaria y de derechos humanos del gobierno Duque para el Pacífico, se centró en la militarización territorial. Aumento del pie de fuerza en Buenaventura, Chocó, Nariño (sólo en el Pacífico Sur-Nariño más de cinco mil militares y policías[5])

La respuesta del gobierno centrada en la presencia militar, no solamente ha agudizado la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, en la medida en que incrementó el control social y territorial de la vida cotidiana de las comunidades, generó nuevos desplazamientos y confinamiento de comunidades, impidió la libre movilidad social de las poblaciones

La respuesta del gobierno centrada en la presencia militar, no solamente ha agudizado la crisis humanitaria y las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, en la medida en que incrementó el control social y territorial de la vida cotidiana de las comunidades, generó nuevos desplazamientos y confinamiento de comunidades, impidió la libre movilidad social de las poblaciones, incrementó la violencia sexual, bombardeos indiscriminados contra supuestos campamentos de las organizaciones armadas al margen de la ley, en la que murieron civiles entre ellos niñas y niños, fueron asesinados líderes étnicos y defensores del medio ambiente etc., sino que también contribuyó a la reconfiguración del conflicto armado y la continuidad de las violencias en la región. Razón por la cual, a Corte Constitucional declaró que hubo una "violación masiva del acuerdo de paz con violaciones a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz, no solo de los firmantes del Acuerdo, sino también de las comunidades que habían sido afectadas gravemente por el conflicto armado"[6]. El Estado, en cabeza del presidente Duque, omitió proteger a estas comunidades y a los firmantes del acuerdo de paz. Para decretar el estado de cosas inconstitucional, la Corte examinó de manera muy particular la situación de las comunidades del Pacífico.

Fotografía: Andreas Hetzer

Primero la Vida

Por: Jesús Alfonso Flórez López, Asesor Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico- CIVP

¡Primero la Vida! es la consigna que ha guiado durante mucho tiempo a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas del Pacífico, de manera particular desde que el conflicto armado colombiano se extendió hacia esta región profundizando su degradación y ampliando su existencia en el tiempo.

El "Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera", firmado entre el Estado de Colombia y la otrora guerrilla de las FARC-EP, irrigó un bálsamo durante los primeros 18 meses de su implementación, pero lamentablemente fue contrarrestado con el sabor amargo de la reedición de la violencia contra estas comunidades, manifestada en una estela de desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales, masacres, desapariciones y amenazas, reconfigurando un conflicto contradictoriamente en el marco de un período de posacuerdo de paz.

Este escenario es lo que se ha catalogado como crisis humanitaria en toda la región, agudizada además por un gobierno que bajo la consigna de "Paz con legalidad" cerró las puertas de la resolución negociada del conflicto armado, nuevamente negando su existencia, generando un déficit de derechos fundamentales.

El drama del dolor generado por esta violencia ejercida por actores armados identificados como guerrilla, o como paraestatales, bandas delincuenciales y por sectores de la fuerza pública, ha convocado a esta población a pensar en conjunto salidas de solución que afronte y supere tal situación de inhumanidad.

El pensamiento sobre lo humanitario se ha tornado colectivo ya sea para reafirmar propuestas construidas anteriormente como el "Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó", el cual fue presentado a la Mesa de Diálogos de Paz que sostuvo el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN, o bien, para elaborar nuevas iniciativas como el "Pacto por la Vida y la Paz", el que se presentó en el año 2020 en plena pandemia, asimismo, como los llamados corredores humanitarios entre Buenaventura y Cali, o los Santuarios Protectores o Centros Humanitarios.

Todas estas iniciativas han tenido en común elementos que buscan la protección de la vida de las comunidades, para lo cual se requiere atender de manera inmediata las acciones y factores de la crisis humanitaria, los cuales se enuncian a continuación.

- Reclamo para parar o detener de manera inmediata el fuego que en su inmensa mayoría recae sobre la población civil, para ello se han propuesto diversas formas para lograr "ceses del fuego", ya sean unilaterales, bilaterales pero lo más deseables, es que se pacten como multilaterales.
- Aplicación radical de las normas contempladas en los pactos y protocolos sobre Derecho Internacional Humanitario, para que prime el principio de distinción entre los armados y la población civil no armada, por ende, el respeto a todos los espacios físicos de habitación y uso de las comunidades,
- Generación de espacios físicos protectores con veeduría y acompañamiento de la comunidad internacional.
- Un llamado a la transparencia del accionar de la Fuerza Pública, pues en no pocas ocasiones se ha constatado comportamientos de permisividad y connivencia con actores ilegales paraestatales.
- Atención con ayuda humanitaria digna y acorde con los patrones culturales de las etnias que habitan la región del Pacífico.
- Asumir sin reparos por parte del Estado la implementación Integral del Acuerdo de Paz.
- Abrir espacios de diálogo y negociación con los actores armados que conduzcan finalmente a la terminación definitiva del conflicto armado.

Las iniciativas de acciones humanitarias se han configurado no como paliativo que prolonga la guerra, en donde unos agreden, las comunidades huyen, se refugian y los organismos humanitarios reciben y atienden como en una pesadilla sin fin, pues es una situación cíclica.

Lo humanitario es asumido en la lógica de la transformación del conflicto hacia la paz, por ende, es una acción política, la cual toma más fuerza en el actual contexto de la denominada "Paz Total" dado que se requiere un acuerdo multilateral o acuerdos simultáneos que conduzcan a desescalar la violencia contra las comunidades hasta llegar a una terminación del conflicto.

Fotografía: Matts Olsson

Más que una deuda, es una obligación

Por: Dr. Jaime H. Díaz A., director Corporación PODION

El siete de agosto de 2022 se inició un nuevo gobierno nacional, presidido por el izquierdista Gustavo Petro y la ambientalista Francia Márquez. Es un momento inédito en Colombia, tanto por los orígenes del presidente y la vicepresidenta, como por sus propuestas de cambio en los ámbitos social, económico, político y ambiental, pero, además, por querer responder de manera prioritaria a los intereses y anhelos de quienes siempre han sido colocados en un segundo plano, no obstante, son las mayorías.

La Costa Pacífica contribuyó abrumadoramente con sus votos a hacer posible el gobierno elegido. En esta ocasión no hubo margen para la compra de votos. Con pletórica libertad los/as ciudadanos/as con sus mejores galas llenaron las canoas y los pequeños buses, recorrieron esteros, trochas y pequeños caminos para depositar su voto con la esperanza que esta vez fuera posible dotar de poder a alguien que por fin atendiera sus gritos, protegiera sus derechos, hiciera respetar su dignidad y garantizara la integridad de sus territorios.

No será tarea fácil, pero la primera es la protección de la vida. Las masacres, los asesinatos a líderes y lideresas, los desplazamientos y las intimidaciones de todo tipo de actores violentos deben desaparecer. Se requiere que una negociación con el ELN determine desde el inicio la obligación de este grupo a cesar con el asesinato de la población civil. Un cese al fuego bilateral como ha propuesto el gobierno sin duda contribuirá en este objetivo.

El gobierno debe buscar las formas y escenarios adecuados para conducir al sometimiento a la justicia de otros grupos violentos organizados. Entre tanto se deberá afinar la inteligencia militar, perseguir y reducir de forma eficaz a estos grupos. El Dr. Iván Velásquez, ministro de Defensa será sin duda implacable frente a connivencias de la fuerza pública con grupos delincuenciales organizados.

La policía y el Ejército deben ser organismos respetuosos de los derechos humanos y garantía para la protección de las comunidades y sus líderes. Ganarse la confianza de la población deberá ser fruto de un servicio correcto de las fuerzas armadas del Estado.

El gobierno Petro deberá facilitar el retorno a sus territorios de comunidades que han sido desplazadas, para lograrlo se deben garantizar la seguridad y los servicios fundamentales para una vida y trabajo digno.

Existen todavía comunidades que esperan la titulación colectiva de sus territorios. No debe haber más excusa para que puedan tener su propiedad y ejercer el dominio sobre sus territorios.

La minería ilegal debe ser combatida de manera enérgica, lo mismo que las agroindustrias fraudulentas y cultivos de uso ilícito impuestos, que maltratan y destruyen el territorio. Se debe velar porque la minería artesanal no lo lesione.

Los territorios colectivos deben ser sagrados y protegidos para sus legítimos dueños. En ellos las comunidades deben con el apoyo del Estado hacerlos producir de forma sana, acorde a sus costumbres y buscando su adecuada protección. El pago para guardianes de la biodiversidad debería implantarse como una política amplia en varios territorios frágiles del Pacífico y del país.

Los servicios de salud, francamente precarios y en muchos casos inexistentes, deberán llegar con un sistema orgánico, tanto de infraestructura, pero sobre todo con atención médica adecuada. De choque debería establecerse brigadas itinerantes permanentes, por cada uno de los departamentos costeros del pacífico.

La educación requiere además de infraestructura, maestros preparados y pagados de forma oportuna. La educación deberá adecuarse, respetando y valorando usos y costumbres de los territorios. La educación superior debe propender para que los profesionales preparados regresen a sus territorios, para aportar a su etnodesarrollo.

El combate a la corrupción se debe dar en cada territorio como también en los entes correspondientes a nivel regional y nacional. Desde la presidencia se deberá crear un espíritu de transparencia y de enérgica acción contra los corruptos. Se impone una pedagogía y metodología para que el pulcro manejo de los recursos sea un convencimiento y práctica de cada ciudadano; es lamentable que la costumbre tenga tan extendida la tolerancia y hasta la búsqueda de la corrupción.

El gobierno no es el Papá Noel, que trae regalos. Es el ejercicio y obligación de la construcción del bien común desde el buen y adecuado uso de los recursos públicos, con a la divisa: "para los pobres lo mejor". El auténtico desarrollo se hace con la participación activa de todos los agentes, por esta razón cada ciudadano, cada comunidad debe unirse en un propósito común, la superación de la inequidad, el establecimiento de la paz y la convivencia, la protección y cuidado de los territorios, de la mano de un gobierno que pregona y quiere el cambio. Se debe estar alerta para que no se traicionen los programas propuestos y por los que voto abrumadoramente desde los territorios del Pacífico colombiano.

observatorio pacífico y territorio

Territorio de Etnias

Apoya:

MISEREOR
IHR HILFSWERK

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano
@CRPacifico